- En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 9 días del mes de septiembre de 2013, siendo la hora 15:15, en la Sala de Comisiones de la H. Legislatura, se reúne la Comisión Especial de Reforma del Código Procesal Penal de la Provincia.

Sr. Presidente (Caponio).- Buenas tardes.

Estando con el quórum suficiente para sesionar, y siendo las horas 15:15, comenzamos la segunda reunión de la Comisión Especial de Reforma del Código Procesal Penal.

Hoy nos acompaña el doctor Alberto Binder, procesalista, experto en sistemas judiciales. Es miembro del Consejo Asesor del Inecip Argentina; director del Instituto Latinoamericano sobre Seguridad y Democracia; miembro titular del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Penal e igualmente director del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo.

También nos acompaña el doctor Gonzalo Segundo Rua, Juez Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; miembro de la Junta Directiva del Inecip; director del Programa de Reforma para el Inecip y docente de un posgrado de la Universidad de Buenos Aires.

En esta oportunidad les vamos a ceder la palabra al doctor Binder y al doctor Rua para que hagan las exposiciones sobre el proyecto que ha sido celebrado y presentado a la Corte Suprema de Justicia.

Luego de la presentación de los mismos, cada uno de los miembros de esta Comisión van a poder hacer uso de la palabra para sacarse las dudas que tuvieran. Esta va a ser la metodología de esta reunión.

Sr. Binder.- Señor Presidente, miembros de la Comisión: Es un gusto estar aquí para poder plantear las ideas básicas que han motivado nuestro trabajo hasta ahora, también en los años anteriores en los que hemos -de un modo u otro- podido trabajar en Tucumán, y, al mismo tiempo, luego, quedar a disposición de ustedes. Vamos a hacer una exposición simple, no una exposición muy extensa para poder conversar más ampliamente sobre las inquietudes puntuales que tengan.

Voy a explicar algunos de los objetivos más importantes que se vienen y que se están planteando en el país respecto a este tema, y el doctor Rúa va a plantear luego algunos aspectos organizacionales respecto al trabajo específico entregado a la Corte Suprema.

Ustedes saben, todos los que estamos acá no tenemos que insistir en ello, de la enorme preocupación que existe en todo el país por el funcionamiento de la Justicia Penal. Esto viene motivando ya hace un par de décadas un conjunto de reformas que se van realizando y que van evolucionando según también cómo han ido evolucionando los distintos problemas a los que tiene que enfrentar.

Tucumán es una Provincia pionera en nuestro país en establecer un cambio en la legislación procesal, que por ese entonces se veía como un cambio muy difícil de lograr en otras provincias; de ahí en más hoy prácticamente el resto de las provincias han seguido ese camino. Pero también ya tenemos más de veinte o veinticinco años de experiencia sobre los modos de cómo este sistema procesal tiene que evolucionar para dar respuestas a problemas sociales que a la vez en estos veinte años se han vuelto más complejos.

Me parece que es un buen método de trabajo -en términos generales cuando hablamos de estas reformas- el no quedarnos simplemente atrapados en los problemas técnicos de cada uno de los artículos del Código, sino poner sobre la mesa el norte de los problemas sociales más urgentes que hay que resolver que, insisto, desde hace 20 años se han vuelto mucho más urgentes.

El primero de ellos es un conjunto de problemas que tiene que ver con el modo de cómo modernizamos y actualizamos nuestra respuesta al fenómeno criminal. Creo que si esto era un problema antes, ahora se está volviendo cada vez más un problema de enorme envergadura en el país.

Y ¿qué significa o cuáles son las tareas? Muchas, y voy a señalar tres tareas que después las van a tener presentes en los ajustes que se pretendían hacer. Es una reingeniería que hay que hacer en el proceso penal tucumano. Pero voy a señalar esos tres problemas que me parecen los más urgentes.

En primer lugar, urge reorganizar nuestro sistema de investigación de los delitos. El modelo que tenemos de investigación de los delitos es obsoleto frente a un fenómeno criminal que se ha vuelto ya mucho más complejo. Hoy ya ni siquiera tenemos que hablar

de la clásica división entre delitos comunes y delincuencia organizada porque la gran mayoría de los fenómenos delictivos responden a campos y a estructuras organizadas. El robo de celular, un delito menor, no podemos tomarlo como un delito menor, sino como un mercado que se expande.

El robo de vehículos, el narcotráfico ya no es algo en que las provincias puedan quedar al margen porque ya se ha instalado, de algún modo, en la vida de los pueblos, de las ciudades y hay que construir un nuevo tipo de trabajo entre el sistema federal y los sistemas provinciales, tanto policiales como de fiscalía; también la trata de personas.

Hoy cuando analizamos los fenómenos criminales estamos buscando en mucho de ellos un mercado, muchos de ellos son fenómenos en expansión y frente a ellos nosotros estamos respondiendo con modelos de trabajo muy antiguos, tanto en el modelo de la fiscalía como en el modelo de la Policía; si hay algo que caracteriza a la Policía de investigaciones, sea cual fuere la estructura y la dependencia que tengan porque no pasa por allí el problema, que tienen una casi nula capacidad de investigación por sus métodos, por su infraestructura. Les pongo un ejemplo que estábamos conversando hace dos días en la Policía de Río Negro. Prácticamente ninguna de nuestras policías provinciales tienen un sistema de escucha telefónicas –digamos- o de captación, que, por supuesto, con autorización judicial es la base de un sistema de investigación moderno, se han hecho interpretaciones con las cuales cualquier fiscal o cualquier juez después de señalar que son pruebas que mandaban a Buenos Aires o al nodo correspondiente a la provincia, con ilimitada capacitación. Todo eso, si tuviera más tiempo -no quiero extenderme más- podría señalarles muchos argumentos donde prácticamente el Estado democrático carece de las herramientas necesarias para enfrentar a la criminalidad con buenos sistemas de investigación, para ser sistemas de investigación en serio. Entonces, el sistema después ¿qué es lo que hace? Pretende trabajar sobre la flagrancia o inventa flagrancia, si hay que hacerlo, yo no digo que no, pero trabajamos sobre los segmentos que menos influencias tienen en el desarrollo del mercado terminal.

Frente a esto no podemos oponerle un Ministerio Público que esté fraccionado, que reproduzca la vieja lógica de la Justicia de Instrucción, en la Fiscalía 1, 2, 3 o 4 que no colaboran entre ellos, que tengo el fiscal de Instrucción y el fiscal de Cámara, ya está probado. Les podría mostrar ejemplos de muchos países que ese modelo de ministerio

público no tiene capacidad de organizar sus propios trabajos y menos capacidad tiene de trabajar en conjunto con la Policía.

Entonces, uno, esto que llamamos “reforma de segunda generación” y que con una reorganización fuerte del Ministerio Público para -a partir de allí, porque ahí no se acaba el problema- comenzar una modernización del sistema de investigaciones. El sistema democrático tiene por suerte una limitación, tenemos que enfrentar la criminalidad con herramientas admisibles en el estado de derecho, esto es algo que valoramos como positivo, pero para eso tenemos que aprender a jugar a ese juego con eficacia.

Así que, fíjense ustedes, me parece que este objetivo hay que ponerlo permanentemente en el centro de la escena y de allí salen las reformas tácticas que hay que hacer.

Lo segundo, que tiene que ver con modernizar nuestra respuesta frente al fenómeno de la criminalidad tiene que ver en el modo en cómo tratamos a las víctimas. Las víctimas generan un acumulado de dolor social y de insatisfacción que finalmente quedan insatisfechas y que todos conocemos lo que llamamos doble o triple proceso de victimización. Otra vez volvemos a lo mismo, tenemos que tener un sistema de Justicia Penal que tenga la capacidad de hacer una alianza con la víctima, no en los términos de que los fiscales se sumen y redoblen la rabia o el dolor que pueda tener la víctima, pero sí una alianza muy profunda para gestionar esos intereses hacia un lugar donde consigamos justicia con más racionalidad, con menos contenido de violencia porque es, en última instancia, lo que estamos buscando en la sociedad, pero sin abandonar nunca esta fuerte alianza con las víctimas.

Creo que es allí donde aparece una segunda gran medida de reorganización del sistema porque otra vez el Ministerio Público es el que tiene que tener una organización con una trama abierta para establecer estas alianzas que gestionen, que canalicen hacia la institucionalidad, el dolor de las víctimas y que no quede flotando en la sociedad como una especie de reservorio, de bronca, de resentimientos, de violencia. Esta es una de las esencias históricas de la justicia penal y para eso hay que generar mecanismos procesales que permitan ese acompañamiento de la víctima hacia la sala de audiencias.

Y, en tercer lugar, otra vez un problema de fondo, tiene que ver con la enorme cantidad de conflictos que hoy ingresan a la justicia penal, ya sea porque hemos ampliado

enormemente la legislación penal, ya sea porque hay deficiencia en los otros sistemas como el civil u otros que no gestionan adecuadamente esos problemas y, por lo tanto, alguien podrá discutir si esto es de la esencia de la Justicia Penal o no, pero tiene un pragmatismo muy claro y hace muy bien a la Justicia Penal. Tenemos que ampliar las herramientas de respuestas de esa Justicia Penal. No alcanza al modo antiguo una Justicia Penal que solamente tiene un gran martillo y lo único que puede hacer es pegar fuerte o pegar despacito. Hoy en día los sistemas modernos son sistemas con 20, 30, 40 modelos de respuestas distintas, cada uno de ellos, con esquemas de trabajos. Esto es lo que llamamos “la organización en el sistema de alternativas”, que luego le ponemos el nombre de “principio de oportunidad”, pero principio de oportunidad no es una institución, sino que es un conjunto de instituciones, como también significa una renovación muy profunda del instituto que ustedes ya tienen. La suspensión a prueba, está siendo muy subutilizado, porque se lo ve desde el trámite, se lo hace funcionar en el fin de un proceso, cuando en realidad es todo el sistema de penas alternativas, que tiene que funcionar en los inicios del proceso.

Todo este sistema de respuestas que permite ampliar la propuesta fiscal, la productividad de la Justicia Penal tiene que estar acompañado por un eficiente esquema de supervisión para que la sociedad no vea que esta es una forma de impunidad, sino que son formas alternativas de hacerse responsable, de hacerse cargo. No nos olvidemos de que finalmente, el objetivo de todo esto no es una sociedad que tenga miedo, sí una sociedad que se haga responsable. Estos son como dos modelos de Derecho Penal que siempre están sin discusión.

Entonces, el primer objetivo que ustedes van a reconocer, medidas concretas que son las que hace años se vienen discutiendo aquí, en Tucumán, tienen que ver con cómo un sistema democrático moderniza y actualiza las herramientas que tiene para frente a una criminalidad que se ha vuelto enormemente compleja, con muchos recursos, con mucha organización, con planificación, y nosotros le respondemos yendo detrás de cada caso, descoordinadamente, a ciegas, sin información, sin inteligencia, siempre golpeando en el mismo lugar, y a esto la sociedad lo ve con claridad y pide a gritos que cambiemos de métodos de trabajo.

El segundo gran objetivo que hemos discutido y que está en la Mesa desde el inicio, y corresponde a las discusiones que hemos dado acá, en Tucumán, desde hace mucho tiempo, tiene que ver con el hecho de preservar la figura del juez. Un sistema democrático necesita jueces, necesita muchos jueces, y nosotros tenemos un modo de organizarla a la Justicia, un modo de organizar al juez, en el cual, sus problemas de origen, que no tiene legitimación popular y posiblemente no queramos que esté sometido a ese tipo de legitimación, queda erosionado rápidamente y, hoy, prácticamente, en un contexto de gran publicidad, no resista.

La figura del juez que, además, dada la potencia de las nuevas herramientas de investigación, cada vez la necesitamos más, solo hay que ver el panorama del mundo, de lo que significa la potencia que tienen las herramientas de investigación, al juez hay que rescatarlo y liberarlo, para ubicarlo en un lugar socialmente visible y en un lugar donde esté clara su función. Y esto no es filosofía política, esto es algo muy concreto, al juez adquiere visibilidad cuando está en su nicho histórico institucional, que se ha construido a lo largo de los siglos, que es la Sala de Audiencias. Los sistemas iniciales del sistema acusatorio, creíamos que poniendo o fortaleciendo el juicio oral alcanzaba, pero el simple establecimiento del juicio oral nos llevó de nuevo -y esto lo aprendí con la práctica-, a los problemas históricos del sistema mixto. Es decir, instrucciones altamente formalizadas que luego avanzan, inclusive, sobre el juicio oral, sin volverlo algo aburrido, largo, repetitivo y sin significación social.

Lo que hemos descubierto, simplemente trabajando veinte años en el campo, es cuando uno suelta un sistema más allá de como lo haya diseñado, el Estado actual de nuestro pensamiento jurídico, de nuestra práctica judicial lo empuja de nuevo al sistema mixto. Entonces, ahí intervenimos sobre él, dándole un golpe de timón para ir corrigiendo esa deficiencia.

¿En qué consiste esto de un modo muy simple y práctico, que hemos aprendido? Hay que oralizar lo máximo posible todas las instancias del proceso. ¿Por qué? porque eso lleva a que el juez esté siempre en la Sala de Audiencias, obliga a generar litigios, depura el litigio entre las partes, sacándolo del litigio indirecto y esta forma donde estamos jugando todos a ver cómo *tiramos la pelota afuera*, en vez de trabajar una decisión.

Es decir, jueces trabajando en la Sala de Audiencias, y ojalá que tengamos jueces que su trabajo sea siempre y exclusivamente en la Sala de Audiencias, si acá pudiéramos tener jueces trabajando seis horas por día en la Sala de Audiencias, les puedo asegurar que el sistema levanta vuelo en cuanto a su efectividad y a su respecto de las garantías.

Y, por supuesto, allí está una de las grandes reformas que hemos aprendido y que es un déficit explicable por el momento en cual Tucumán hizo su primera reforma.

Oralizar, ¿qué significa? Poner al juez en garantía, ustedes ya lo conocen, que este es un avance, podremos trabajar siempre en audiencias y que no esté trabajando sobre los expedientes, evitar los expedientes, que van y vienen cosas permanentemente, pero el juez debe estar en la Sala de Audiencias y así se hace el trabajo.

En la audiencia inicial, que hoy todos los sistemas las tienen, en nuestro sistema de garantía se juntan en algo muy sencillo en dos momentos clave que estructuran todo el sistema: cuando una persona es detenida 24 o 48 horas como máximo, tiene que estar delante de un juez; está en el viejo pensamiento republicano y en muchas de nuestras constituciones. Pero un juez en serio, no un pase contable, un juez con el fiscal y el abogado y luego el juicio oral, después en el medio podemos construir algunas cosas. Pero estas son las dos grandes ruedas del sistema de garantías. Y de eso se trata, hacia donde hay que empujar el sistema de justicia penal de aquí, de Tucumán.

De la mano de esto va a estar necesariamente un fortalecimiento de la defensa, tanto de la defensa pública como de la defensa privada, porque este juego necesita defensores que estén trabajando en la salas de Audiencias también. En el caso de la defensa pública, -y esto ha sido la experiencia demostrable en toda América Latina- porque ha significado un fuerte aumento de la defensa pública.

En el caso de la defensa privada, porque se fortalecen a tal punto la imparcialidad y punto el diálogo directo con el juez y con la otra parte, que el abogado empieza a tener herramientas, defensa penal efectiva, que antes quedaban en proclamas y nada más.

Con todo esto -y con esto termino para no extenderme- se pretende también dar solución a un tema que se está viendo claro en nuestro país, que es necesario comenzar un nuevo diálogo entre la sociedad y la administración de justicia. Un diálogo más comprensible, un diálogo más sano, un diálogo donde se entiendan, un diálogo donde salgamos de los laberintos, un diálogo donde la sociedad pueda comprender por qué se

retoman ciertas razones, un diálogo donde no siempre se estén viendo las demoras y la irracionalidad de muchos procedimientos. Y ese diálogo, con la administración de justicia, forma parte central de la cultura cívica de los próximos años y de la estabilidad institucional de los sistemas democráticos.

Como ven ustedes, estos son los objetivos -ustedes me dirán objetivos grandes, sí- por los cuales tenemos que dar pasos firmes, pasos en última instancia que nos pongan rumbos, que nos saquen de estar girando en falso. Este es un esfuerzo que están haciendo la gran mayoría de las provincias, que se discute en toda América Latina, de México para abajo. Entonces, evidentemente, no hay nada atrás de esto que sea un problema de coyuntura o circunstancia.

Ustedes han decidido ahora ponerlo a revisión, lo que me parece fantástico, digamos, los modos para lograr esto. Esto se puede lograr de muchos modos posibles. Lo que no se puede hacer es desconocer la experiencia que ya trae Tucumán. En esto sí quisiera hacer un llamado; es decir la pregunta ¿por qué Tucumán, teniendo hace veinte años el Código más avanzado de la Argentina, no logró cambiar las prácticas, y hoy, veinte años después, prácticamente tiene reproducido el funcionamiento de la Justicia en instrucción anterior? Es una pregunta que quien quiera trabajar sobre el terreno tiene que hacerse, porque sino nadie puede garantizar que no ocurra de nuevo el mismo proceso.

Entonces eso fue lo que ha llevado a tratar de diseñar un modelo de intervención que sea más profundo. Para explicar cómo fue el trabajo hecho hasta ahora, destinar esos insumos para continuar hacia adelante.

Le dejo la palabra al doctor Rúa.

Sr. Rúa.- Siguiendo un poco la mano de lo que acaba de mencionar el doctor Alberto Binder, quisiera trabajar un poco respecto de cuál fue la mecánica de trabajo que nos planteamos los años 2011, 2012 y parte de 2013, cuáles eran los objetivos que nos habíamos trazado y por qué teníamos esos objetivos.

Para comenzar y contextualizándolo al proceso de reforma tucumano -y también el doctor Binder lo mencionaba- con el proceso latinoamericano, es bueno remarcar esta idea, este concepto que mencionó el doctor Binder respecto a la importancia de observar los procesos de reforma que se fueron dando en América Latina para poder construir desde allí.

Y si uno tuviera que rápidamente fijar escenarios que se fueron dando en América Latina, uno debe comenzar en la Argentina con el Código de Tucumán, que es el primer Código con un rasgo acusatorio, que le da facultades al Ministerio Público Fiscal para investigar en el país, y que fuera aplicado en la década de 1990 por varias provincias, entre ellas Córdoba, Mendoza y Chaco que fueron siguiendo un poco la línea que trazó Tucumán.

Ahora, también tenemos que remarcar que uno observa el resultado que han tenido esos procesos, no solo de Tucumán sino de estas provincias que les mencionaba, y uno observa que posiblemente los cambios que se pretendieron no fueron tales, digamos, algo pasó en el medio que no logramos cambiar la inercia del modelo anterior de un modo inquisitivo. Y este fue el primer desafío que nos planteamos para trabajar en qué es lo que necesita la Justicia tucumana para modernizar sus oficinas judiciales, para tener oficinas que les permitan realizar investigaciones complejas y que, en definitiva, se conviertan en un buen servicio de justicia de cara a la comunidad.

Básicamente, esos códigos que llamamos “acusatorios de primera generación”, el principal escollo que tuvieron fue que no lograron salir del sistema burocrático, escrito y ritual que tenían esos modelos. Básicamente, la investigación nos demanda mucho tiempo en llevarla adelante, demanda muchos pasos procesales y muchas veces lo que se está discutiendo en esos casos no es el caso en sí, termina siendo una suerte de litigio indirecto en el cual los abogados están discutiendo un montón de aspectos pero que no tienen que ver con el foco del conflicto, el punto en cuestión en discusión.

Y realmente creo que para quienes somos abogados, nos resulta muy difícil explicar a la ciudadanía qué es lo que hacemos en Tribunales, qué es lo que pasa en Tribunales, por qué se demoran tantos los casos. Y realmente tratar de dar respuestas básicamente es inadmisibles porque terminan estando con plazos bastante duros, bastantes estrictos que no permiten optimizar las funciones. En base a eso los códigos acusatorios de segunda generación en el país advirtieron esos inconvenientes y fijaron las pautas de trabajo o las bases del nuevo sistema en algunos grandes rasgos. En primer lugar, oralizar - como decía el doctor Binder- todas las decisiones. El oralizar todas las decisiones lo que genera es un sistema de justicia mucho más dinámico, mucho más expeditivo, pero, por sobre todas las cosas, genera que se evita que el juez esté delegando funciones, resuelve de cara a la comunidad, se fortalecen valores republicanos y democráticos y, por otro lado, se

genera también una mejora sensible en el contradictorio: las partes pueden contradecir constantemente el argumento de la contraparte.

En segundo lugar, la decisión de establecer salidas tempranas. Esta idea de que la suspensión condicional del proceso a prueba deje de verse como una decisión burocrática, donde nadie se fija en cuál es la respuesta que se espera, que se toma en forma tardía, no permite, en definitiva, conformar a la ciudadanía. Una víctima, que en última instancia a los dos o tres años le avisan -si es que se entera- que el caso tuvo una salida alternativa al conflicto porque se otorgó una *probation* al imputado, es una respuesta de baja calidad. Si no logramos revertir esta lógica y no logramos tomar estas decisiones de manera temprana en los pocos días de ocurrido el hecho, difícilmente vamos a poder mostrar una respuesta a la ciudadanía.

Y, en tercer lugar, para lograr un poco estas dos ideas de oralidad y de establecer un sistema con oportunidades tempranas, está la necesidad de trabajar en una lógica distinta, dejar un poco la idea de expedientes escritos, formales que lo único que se generan son planteos de nulidades y dar paso a lo que es una idea de un legado desformalizado, en el cual las partes lo único que tienen que tener es evidencias para poder conformar la decisión de un juicio.

Esas bases que parecen bastante sencillas de comprender, bastantes sólidas y que hay enorme experiencia en Argentina y en América Latina, como decía Alberto, hay muchas provincias que están trabajando en esta lógica, Santiago del Estero, Salta, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén está ingresando y Río Negro, son bases muy sólidas que para que puedan funcionar se requiere de alguna lógica y de un desarrollo acompañado en forma institucional.

En primer lugar, se requiere que esta visión política de la reforma trabaje en tres grandes ejes: el normativo, cultural o de capacitación y organización, que es donde me quiero detener hoy con ustedes. Nosotros, cuando comenzamos a trabajar en Tucumán, advertimos que ya tenía -como dije recién- un sistema acusatorio, pero que por estas cuestiones más bien formales y rituales, no lograba satisfacer ni a víctimas ni daba un sistema que sea respetuoso de las garantías para los imputados. De modo tal, que lo necesario, fundamentalmente, era trabajar mucho en el plano cultural y de capacitación y

ver y diseñar cuál era la organización que requería Tucumán para poder dar respuesta en el servicio de justicia.

Esa fue la base que nosotros comenzamos a trabajar y tuvimos dos o tres grandes ejes. En primer lugar, el eje que tiene que ver con el sistema de Justicia, lo que es la magistratura, cómo generar que los jueces se ocupen específicamente de resolver en audiencia.

Esto me parece bastante sencillo, quien no esté en el sistema judicial, créanme que no es tan sencillo en un sistema donde es bastante burocrático y donde la toma de decisiones está confundida con trámites administrativos, con papeles, con atención al público, con un sinnúmero de actividades que en su gran mayoría nada tienen que ver con la función jurisdiccional. Entonces, el primer gran eje que nos trazamos es generar que los jueces se ocupen de juzgar, básicamente eso, que los jueces resuelvan, pero que resuelvan en audiencias así evitamos la delegación de funciones, esta forma de trabajo que en los sistemas inquisitivos ocurre constantemente y que los sistemas acusatorios de primera generación, al no generar un cambio en la organización, terminaron cayendo en la misma lógica. Entonces, diseñamos un modelo en el cual esté bien definida lo que es la función jurisdiccional en audiencia de lo que es la función administrativa. Para eso se establecieron una lógica de colegio de jueces donde los jueces actuales de Instrucción se ocupen de esta función de garantía, que es la función que se ocupan, se nombre juez de Instrucción pero claramente la función según el Código Procesal Penal de Tucumán, es la función del juez de Garantía y que los jueces de juicio se ocupen también exclusivamente de realizar audiencias de juicio. Para eso es necesario profesionalizar la función administrativa, entonces, lo que propusimos para trabajar es un diseño en el cual aparece una figura muy importante que es el director de la oficina Judicial de Gestión de Audiencias que se ocupa de generar el escenario para que las partes puedan litigar de cara a la comunidad. Y de esta manera – este no es un dato menor- se empieza a trabajar fuertemente, como se viene trabajando hace treinta años en toda América Latina con valores democráticos y republicanos. Todos sabemos que los sistemas de justicia no tienen las mejores estadísticas en confianza, en seguridad en la ciudadanía y creo que como sistema de Justicia, debemos hacernos cargo de esta cuestión.

Uno de los primeros valores que se trabajó con la vuelta de la Democracia en toda la región, es esto de valores democráticos y republicanos y si nosotros no logramos generar un sistema de audiencias donde los jueces puedan resolver de cara a la comunidad, difícilmente van a poder entender de qué se trata o cuáles son los fundamentos de cada una de las decisiones de los jueces. Entonces, este fue el primer gran eje para comenzar a trabajar este diseño. Entonces, para profesionalizar –como les decía- esto lo vamos a pasar rápidamente, igualmente, desde ya estoy a disposición de ustedes las veces que sean necesarias, pero fue un trabajo de todo un año en el cual verificamos, de acuerdo a las necesidades de Concepción y de Monteros, cómo diseñar esa gran Oficina Administrativa y para eso trabajamos fuertemente en grandes ejes y grandes necesidades para que el Sistema de Audiencias empiece a cumplir sus funciones de manera eficaz.

En primer lugar, lo que es la Oficina de Gestión de Audiencias en sí para generar notificaciones, decisiones que cuando el juez llegue a la audiencia no se suspenda, que las audiencias tengan buen nivel técnico, que se desarrollen con tiempos adecuados, que no haya suspensiones.

En segundo lugar, otro gran eje tiene que ver con la idea de una oficina de jurisprudencia. Es importante que el juez que resuelve las audiencias y que tiene que estar entrenado, por eso también trabajamos en el eje de la capacitación, entrenados para tomar decisiones orales y en forma inmediata, tenga a manos, a medida que vayan avanzando en los casos, jurisprudencia, no solo personal de cómo va resolviendo cada una de las decisiones interlocutorias, sino también de la Corte Suprema, de la Corte Suprema tucumana y de los distintos modelos o casos que han pasado bajo la misma lógica.

Y luego, lo que tiene que ver con las funciones de administración de inmuebles y funciones más bien administrativas que hoy en día el juez tiene que ocuparse y que no tiene mucho sentido con lo que representa la función del juez, como decía, Alberto Binder, esté ocupándose de funciones puramente administrativas.

Luego de eso está el segundo gran desafío que tiene que ver con cómo hacemos en un sistema acusatorio en el cual al Ministerio Público Fiscal, el fiscal se le pone bajo sus hombros un montón de responsabilidades que tienen que ver, no solo con llevar un caso a juicio, sino más bien también con tener un adecuado manejo de política criminal, decidir

qué caso va a investigar, que tiene que ver con esto, trabajar con la víctima, tener una respuesta hacia la comunidad, tener manejo comunicacional.

Cuando comenzamos a hablar, a principios del año pasado, un poco todas estas funciones que están en los hombros del Ministerio Público Fiscal, yo recuerdo que muchos de los operadores de Concepción y Monteros nos miraban y nos decían cómo vamos a generar estos cambios en esta organización, es que la organización que tenía, es una organización que lógicamente es muy rígida y no permite llegar a esos cambios. Entonces, básicamente trabajamos en dos líneas: una que tiene que ver con descentralizar y otra que tiene que ver en trabajar en base al diseño, en base a los flujos de trabajo.

La primera gran decisión que tomamos es cómo generar funcionarios de la Fiscalía que puedan dar respuestas a la víctima en ciudades, que estaban en la misma jurisdicción, pero que estaban alejadas y que tenían una población lo suficientemente grande como para tener respuestas. Y ahí vimos que la conformación de unidades descentralizadas en Alberdi, en La Cocha, en Graneros y en Río Chico que tenían por objetivo esa idea de descentralizar, que la comunidad pueda tener una respuesta, que pueda tener un diálogo permanente con un funcionario de fiscalía y que allí pudieran también, los casos más sencillos, obtener respuestas rápidas.

El otro eje, ya no con la centralización, sino cómo manejar el flujo de causas tenía que ver con evitar la lógica de fiscales celda, que es esa lógica en la cual cada fiscal es el dueño de la fiscalía y se maneja en base a sus propios criterios y que esto genera enormes inconvenientes de política criminal.

En primer lugar, no permite trazar una política criminal adecuada para casos que son bastante similares.

En segundo lugar se genera un sistema que es muy rígido y que no permite mayores flexibilizaciones al momento de investigar.

Y, en tercer lugar, dejar decisiones tan distantes entre sí a un fiscal como lo es investigar, como lo es dar respuestas a la víctima y como lo es también litigar en el juicio oral es bastante complejo para que ese fiscal pueda dar respuestas.

De modo tal que trabajamos en algunos subsistemas: un primer subsistema que tiene que ver con la atención de la víctima. Un segundo subsistema que tiene que ver con lo que es dar respuestas rápidas para se materialice efectivamente a los pocos días de ocurrido un

hecho. Una tercera unidad que se ocupa de lo que es la investigación y la litigación a juicio. Y luego tres unidades más: una que se ocupe de procesar información en los denominados en él; y, dos unidades, que eran bastantes interesantes o que son bastante interesantes desarrollar, la primera con los delitos de violencia doméstica. Realmente en el país hay escasísima información respecto de cuántos hechos o cuántos delitos hay, su raíz es la violencia doméstica. Como las estadísticas se suelen manejar por delitos y no por conflictos, nosotros sabemos que hay daños, que hay lesiones, que hay amenazas, que hay abusos sexuales, pero no sabemos cuál es la raíz del conflicto. Una unidad que se ocupe de violencia doméstica es una unidad que se pone de cara a enfrentar el conflicto que hoy preocupa mucho en los poderes judiciales.

La otra unidad tenía que ver con verificar cuáles son los delitos más complejos en cada jurisdicción para tener una investigación precisa, circunstanciada y con un buen manejo de la teoría del caso.

Las oficinas administrativas van por fuera de lo que es la función del fiscal y ahí vemos los dos grandes ejes que tiene la unidad de atención primaria: un primer eje que tiene que ver con lo que es el manejo de la información con la Policía y de la toma de denuncias. Es muy importante que la Fiscalía empiece a tener una relación con la Policía, de mucha información y de una información constante, evitando caer en lo que era el modelo inquisitivo y el modelo acusatorio de primera generación, que al ser fiscal de celda, cada fiscal da una directiva distinta a la Policía.

Entonces, aquí se había pensado también -de cara a la comunidad- trabajar en la oficina de enlace entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía, que tenga reglas claras de juego respecto de qué información y cómo necesita la Fiscalía esa información.

Y el segundo eje es la atención concreta de la víctima con un gabinete interdisciplinario que estaba pensado trabajar en primer momento, en una primera instancia, para los delitos de violencia doméstica y para los delitos de abusos sexuales para dar otro tipo de respuestas a las víctimas.

Respuestas rápidas, como verán, había fiscales básicamente con menor experiencia que se iban a ocupar de dar respuestas rápidas en lo que tiene que ver con salidas alternativas. Queremos una reparación, queremos llegar a una *probation*, queremos eventualmente arribar al juicio abreviado, esa decisión tiene que ser en pocos días. Y esa

decisión tiene que tener un control adecuado y para eso se había establecido también una oficina de control de medidas alternativas a la prisión preventiva y de control también del cumplimiento de la prisión preventiva cuando sale en libertad, para que, de esta manera, las salidas de calidad sean efectivamente salidas de calidad.

El ejemplo más paradigmático hoy en día es de la Justicia Nacional, en el cual tres juzgados de ejecución -que ahora la Fiscalía ha unificado- hacen un control burocrático de las reglas de conductas y después de cinco años a la comunidad le están dando respuestas que dice: “Mire, señor Juez, yo no sé si cumplió o no cumplió, no pude controlarlo”. Y entonces los jueces dan por cumplido el acuerdo y se archiva el caso. Esta es una respuesta de bajísima calidad, que si no tenemos controles es lo que ocurre. Entonces, también teníamos pensando el diseño de una oficina que se ocupe de verificar esta información.

Investigación y litigación también con perfiles administrativos para profesionalizar la función, algunos bien marcados para el juicio oral con una función muy marcada con respecto a teorías del caso y a manejos de pruebas en juicios. Y, por otro lado, empleados que se ocupan también -junto con el fiscal- de realizar la investigación en sí y tener un trabajo más de calle.

De esta manera, cuando el fiscal decide llevar el caso a la unidad de investigación y litigación está demostrando eficacia, porque ya no va a llegar a un acuerdo y rápidamente el caso puede estar en juicio y no como ocurre hoy en las jurisdicciones que no han ingresado en estos códigos adversariales de segunda generación.

Luego la Unidad de Transición, porque teníamos que trabajar fuertemente. Este es uno de los grandes desafíos de los sistemas de reformas, trabajar en lo que se conoce como sistema o generar un sistema conclusivo de causas. Porque cuando empieza una reforma, si la reforma comienza con todo el bagaje, con toda la carga de casos que tiene el sistema, difícilmente va a poder dar respuestas. Entonces, se generan escenarios paralelos en el cual una transición se ocupa de los casos que hay que ir cerrando y antes de que entre en vigencia el sistema empiezan a cerrarse los casos de menor conflicto, buscando salidas alternativas. A esa misma unidad, como es una unidad de transición que no dura mucho en el tiempo, se la había establecido también la función de empezar a generar información a través de los casos denominados NN y generar investigaciones a través de ellos.

Sobre la Unidad de Asuntos de Violencia Doméstica, acá había que tomar decisiones respecto si se tramitarían aquí los casos más graves o todos los casos. Como la mayoría de ustedes saben, estas unidades comienzan con una asistencia interdisciplinaria del cual se define si el caso es de riesgo alto, medio o bajo y, entonces, en base a la cantidad de casos habrá que definir si esta unidad se ocupa solo de litigarla o también tramitarán por allí los casos de respuesta rápida. Igualmente, como ven en la filmina, tenía también su gabinete interdisciplinario.

Por último, la Unidad de Delitos Complejos con la lógica que ya les había dicho de investigar los hechos más complejos de investigación.

Luego con respecto a la defensa -y con esto para tratar de ir cerrando un poco las ideas-, habíamos observado que también tenía un modelo bastante burocrático en el sentido de dos unidades de defensa tipo celdas que no tenían mayor relación entre sí. Entonces, el diseño de una defensa modera en un sistema adversarial tiene que ver con una lógica de compartir los escenarios en las oficinas, y en esa misma inteligencia también optimizar los recursos humanos con que cuenta. De modo tal que así como hay funcionarios fiscales que hacen la suerte de fiscales *ad hoc*, la defensa también podría trabajar con los abogados en una suerte de funcionarios de la defensa.

Del mismo modo, en esta lógica de cómo ingresa la defensa privada, bueno, ella en esta misma lógica en un sistema de audiencias se le permite tener sus propios ejes de investigación y presentar sus evidencias en forma temprana en las primeras audiencias del caso para que pueda ir buscando y refutando los argumentos de la Fiscalía.

En este contexto estas fueron básicamente las bases del diseño que habíamos establecido, estas bases se conformaban básicamente con un rediseño de los recursos humanos con que cuenta el Poder Judicial. Fíjense que el cambio de paradigma entre un modelo y otro es bastante marcado, sin embargo, la cantidad de empleados y funcionarios es prácticamente la misma. Un sistema adversarial empieza a fijar el flujo de trabajo del Ministerio Público Fiscal, y si el juez tiene que resolver en un sistema de audiencias, no requiere de tantos empleados en ese sistema.

De modo tal que ese cambio, esa transformación de lógica genera que los empleados que empiezan a no tener una función clara en un sistema de audiencias, se

quedan sin la función clara, no en la magistratura sino más bien en el Ministerio Público Fiscal.

Y, por otro lado, respecto el plano normativo, observábamos que a diferencia de otros procesos de reforma en los cuales hemos trabajado y hemos diseñado planes de implementación, en este caso, siendo que el Ministerio Público Fiscal ya es el que investiga, no se requerían mayores ajustes, toda vez que de este modo lo que estábamos fortaleciendo es el sistema adversarial.

Hubo provincias que han avanzado en esta lógica, como Entre Ríos, que avanzó en profundizar el sistema acusatorio; la Provincia de Santiago del Estero también ha avanzado en esta lógica y para eso también es muy importante la capacitación en la que trabajamos durante todo un año.

Creo, como mencionó el doctor Binder, que es muy positiva la discusión que se genera en Tucumán, también que en este momento haya una comisión conformada para verificar el funcionamiento del sistema de justicia. Es un escenario ideal para debatir respecto de cuáles son las respuestas que está dando el sistema de justicia, cuáles son las respuestas que queremos que de un sistema de justicia democrático, republicano y, en base a eso, poder trazar los ejes normativos y organizacionales necesarios para cumplir esas funciones.

Hasta aquí mi participación y estamos abiertos a las preguntas que quieran formular.

Sr. Presidente (Caponio).- Muchas gracias, doctor.

Tiene la palabra el señor Legislador Vargas Aignasse.

Sr. Vargas Aignasse.- Gracias, señor Presidente.

La verdad es que agradecemos a los doctores que se hayan acercado a la Comisión para comentarnos a grandes trazos la idea de este plan piloto que hemos conocido por acordadas de la Corte. Lo que rescato de las palabras de ambos es que creo que todos queremos lo mismo y, en ese sentido, sabemos que es necesario agilizar los procesos, sabemos que hay que hacer hincapié en la etapa de la instrucción. Entendemos que es necesario un cambio y eso, bueno, a partir de un acuerdo general que seguramente los

magistrados, los abogados que nos acompañan también, todos sabemos de la problemática que hoy tienen; al diagnóstico lo conocemos todos.

Ahora cuando leía el plan piloto y ahora que escucho a los doctores, me surgen algunas preguntas y algunas dudas, porque uno ha estudiado y se ha formado con otros conceptos jurídicos. Ha leído el Derecho Penal de fondo de Soler, hemos estudiado nuestros códigos, he sido alumno de la doctora Castillo de Ayusa que está acá y ahora tener el placer de compartir con ella este espacio, pero se me plantean muchas dudas, como el principio de oportunidad, cómo puede rozar o no las cuestiones de la legislación de fondo porque no es un tema menor, si podemos disponer de la acción penal alegremente o no, pero esas son cuestiones que seguramente necesitaría que se precisen un poco más o en cuanto a la posibilidad recursiva que pueda tener aquel ciudadano que hace una denuncia o una querrela criminal y el fiscal coordinador decide archivar la causa, que no prospere, tiene alguna vía recursiva, nosotros tenemos pactos, tratados que, de alguna manera, garantizan todo ese tipo de derechos, de petitionar ante las autoridades.

Y así algunas cosas más que a uno se le vienen planteando y que tienen que ver con un cambio de paradigma que se propone que no es menor y cuando leía las acordadas, no había nada respecto al proceso de los menores; todos sabemos acá que tenemos un enorme conflicto entre la sociedad y el delito generado y propiciado por menores.

Entonces, si hoy en estos días uno escucha que desde candidatos oficialistas se habla ya de eventualmente una reducción de la edad de la imputabilidad, entonces, este no es un tema menor, en semejante reforma ¿qué vamos a hacer con el proceso de los menores? o ¿qué vamos a hacer con ese tema? Creo que nosotros no podríamos no tocar eso, no advertirlo ¿qué vamos a hacer con los juzgados de Instrucción, los juzgados de Garantía, como bien lo llaman los doctores, de las cuarenta mil, más o menos, causas que entran al año hay diez mil que son de materia contravencional, de materia comercial; nuestros jueces son un tribunal apelatorio de la Secretaría de Comercio, tenemos jueces resolviendo cuestiones de naturaleza comercial, de naturaleza contravencional, por más que analicemos todo eso no vamos a necesitar seis horas por día de los jueces, van a estar las veinticuatro horas para resolver todo esto que hay. También hay que avanzar en un cambio estructural, no es solo hablar de paradigmas, de pasar de lo vertical a lo horizontal, así nomás.

Tengo entendido que ha venido gente de Chile, que acá los magistrados los han invitado y muchos de los presentes han estado ahí, que hablaban de que el cambio en Chile ha sido con una inversión millonaria de cientos de millones de dólares o de pesos. También tiene que ver con el tema del presupuesto, de estructura, de envergadura, tenemos cinco jueces de Garantía en la Capital para atender una enorme cantidad de causas y encima les damos que vean cuestiones económicas, cuestiones de naturaleza contravencional.

Cuando uno lee y los escucha a ustedes que saben mucho de estos temas, mucho más de los que estamos en esta Mesa, que no tenemos la especificidad de la materia, pero, bueno, nosotros tenemos la obligación de legislar y garantizar que esto funcione y también nos preocupa la posibilidad de avanzar en un cambio que termine generando una implosión en el sistema; que los culpables no van a ser los jueces, vamos a ser los políticos de eso. Tenemos que ser muy prudentes y medulosos a la hora de tomar este tipo de decisiones y estudiar bien. Pero además, como son cuestiones que rozan las cuestiones de fondo, había otro principio proactivo y pedagógico del juez, que tiene que ser imparcial, no puede estar buscando un avenimiento de partes instando a ello. Por eso, quizás las cosas que uno lee, y la letra fría, cuando uno lee algo, no es lo mismo tener la posibilidad de que se desarrollen los puntos y se pueda avanzar. Pero, fundamentalmente, el principio de la oportunidad es un tema que a mí me hacía mucho ruido, porque entiendo que no podemos disponer de la acción.

El tema de la prueba también, ustedes utilizan un término cuando hablan de la prueba, que lo anoté por acá, el tema de la prueba era indiciaria, alude a la prueba de los indicios, la prueba también es un tema de naturaleza federal que tenemos que ser cuidadoso cuando vemos ese tema.

Esas son un poco algunas de las cuestiones que primariamente puedo tener como duda. Creo que este tema preocupa y nos estamos ocupando, cosa que es buena, pero, reitero que hay algunas cuestiones que, por lo menos, a mí me quedan poco claras.

Sr. Binder.- Son muchos temas, voy a ir respondiendo a algunos que son más importantes.

Primero, claro que estamos de acuerdo con una reforma integral. A esta uno no la puede diseñar, o por nuestra experiencia no es productivo diseñarla en términos sincrónicos, como si hiciéramos acá un mapa o un plano de una casa en la mejor casa posible, sino como todas las políticas públicas hay que darle un cauce para una política

sostenida, en lo que uno hoy en día podemos llamar en el mediano plazo que son cinco, seis, siete años y llevarlo lo más orientadamente posible, porque no hay forma de hacer otros cambios, insisto, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia anterior.

Todos los procesos de reforma en los que a mí me ha tocado participar en su implementación –y son más de veinte- son procesos de largo plazo sostenidos.

Posiblemente la principal experiencia que yo tomaría acá de Tucumán, se ha dado en otros lugares, pero acá, en Tucumán es paradigmático, que es un sistema que se diseña sincrónicamente y se lo deja que flote solo, que navegue solo y es allí donde hoy nos encuentra en un lugar. Me parece que ahí hay que hacer un cambio de metodología, del diseño de las políticas públicas de cambio, que debe ser orientada, progresiva, sostenida y con indicaciones claras, con nortes claros y, obviamente, con inversiones que se van haciendo en el tiempo, con evaluaciones, monitoreo, como se hace una política pública, donde necesariamente hay que reconvertir la práctica de los actores y eso no se hace de un día para el otro. Eso es lo primero, en cuanto al método del diseño de la política pública.

En cuanto al principio de oportunidad, es un tema que se empezó a discutir hace diez años. Las provincias estaban dando su pase al sistema adversarial y lo tomaron se dieron cuenta, que carecían, sin el conjunto de principios que forman el principio de oportunidad, que no es una sola institución, sin capacidad de reparación, sin capacidad de respuestas alternativas, no tenían ninguna chance de poner en marcha su sistema, y otra vez Tucumán es una muestra de ello. El tema se discutió en congresos, se investigó, se ha debatido mucho, pudimos hacer investigaciones históricas demostrando que esto no es algo que viene desde hace mucho tiempo, sino que es un invento específico en un momento muy claro en el cual Joaquín V. González y Rodolfo Rivarola deciden tomar para el Código Penal en todo el régimen de la acción y con párrafos que dicen, no le podemos dejar esto a las provincias, cuando las provincias son incapaces de realizar justicia. Estamos hablando del modelo donde se constituye el modelo centralista. No se olviden que Rivarola, que es el gran ideólogo de todo esto, es el ideólogo del Código Penal actual, tiene un libro que se llama “Unitarismo, Federalismo”, donde le dedica un Capítulo a todo esto y dice, desgraciadamente tenemos una Constitución federal, hagamos todo lo posible para interpretarla lo más unitariamente posible.

Entonces, él toma un diseño político en una época en la cual, prácticamente, hoy ya no se puede hacer así y, además, tenía fundamentos políticos que no son los constitucionales. Y esto invirtió, hoy hay cerca de quince provincias que ya tienen el principio de oportunidad. Hubo planteos en muchas de esas provincias y fallos de tribunales superiores de distintas provincias que han dicho que estas son facultades provinciales, así que no es un tema en el cual se esté improvisando sino al contrario, se ha rescatado esto como una facultad provincial inherente a la facultad de organizar la propia Justicia de cada una de las provincias como norma constitucional específica. Lo mismo que la prueba, nada más que la prueba es una creación jurisprudencial que la va haciendo cada uno de los poderes judiciales.

Ahora, por fuera de este debate constitucional está el tema de sensatez institucional y política. Creo que en el caso de la Justicia Penal de Tucumán, cerca del 85 % de los casos no van a ningún lado. Es decir, uno no puede tener un sistema de Justicia Penal donde el 85 % de los casos vayan a la basura. Esto no resiste socialmente.

Entonces no hay forma, podrán poner 500 fiscales, 1000 jueces y no cambien los niveles de productividad; acá es el método del trabajo lo que tiene que cambiar. Entonces este plan está trabajando sobre un método de trabajo, tanto en lo organizativo como en la cantidad de respuestas para que aumente la productividad de manera que puedan mostrarle a la sociedad en números y también en transparencia, que se demuestre que están dando respuestas.

Cada caso que llega a la Justicia Penal es un conflicto de la sociedad que debe tener una respuesta, no podemos tener una sola respuesta y menos se puede dejar el 85 % de los casos sin respuestas. Hemos tomado los números de casos que llegan -no hemos visto Tucumán- a Concepción, que llegan a Monteros y a otras ciudades y uno toma tres o cuatro años de casos que llegan a una fiscalía y se da cuenta que si pone la gente que ha sido involucrada en cada caso, de un lado y del otro, la mitad de la población -entre esos cuatro años- estaba hablando de la Justicia Penal. Entonces, luego no nos quejemos que la sociedad diga “esto no funciona”.

Es decir, me parece que las razones históricas, constitucionales, de sensatez, de servicios, de dinámica de los sistemas querrán que este es el único camino posible. Es más, si alguien nos llama y nos dice que quiere montar un sistema de Justicia Penal sin

principios constitucionales, le decimos no, no se puede de ninguna manera y no hay ninguna razón que obstaculice eso.

Justamente, recién decía que sobre la participación de la víctima, como se archiva, todas esas cosas, no se llegó a tal detalle porque la idea que estructuró la primera forma de trabajo, el primer plan de trabajo, es esto. ¿Cómo hacemos? Porque la reforma de la Justicia Penal, al fin del día, no son reformas normativas, es un conjunto de personas que hay que llevarlas de un modo de trabajo a otro modo de trabajo en un tiempo equis. Acá, hay mil personas, por ejemplo, que trabajarán en la Justicia Penal, que en cuatro a cinco años tengamos que decirles “trabajemos de este modo distinto”.

Entonces, como ya estaba la experiencia en Tucumán de que se había puesto un buen reglamento de juego, pero el juego era otro, es donde se tomó este tipo de intervención, con sus debilidades, que las tiene y siempre las hemos señalado, pero su fortaleza de decir empecemos a tirar la pelota a ver cómo se juega y vamos acompañando el diseño normativo sobre el terreno, no en el aire.

Ustedes saben que los abogados somos bien propensos a hacer discusiones metafísicas y no discusiones sobre el terreno. Acá dijimos: “toquemos tierra y vamos a hacer la reforma integral, pero sin salir del terreno”. Esa es la lógica que puso todo esto.

Sr. Rúa.- Un tema que había quedado pendiente sobre el juez.

El tema de menores, un poco en la lógica respecto de que esta idea, este plan tenía por objetivo profundizar el sistema acusatorio; era un plan que lo que tenía como última meta era realizar un monitoreo en funcionamiento para ver qué resultado había tenido.

Por eso, en esa primera etapa no se pensó trabajar en menores, que requiere todo un desarrollo, todo un diseño y que posiblemente muchos de estos sistemas empiecen a funcionar verificando el funcionamiento en temas más sencillos y después ingresan al resto. De hecho la mayoría de los sistemas que establecieron un régimen progresivo comenzaron en ciudades más pequeñas, ¿para qué? Para realizar los ajustes necesarios después e ingresar a terrenos por ahí un poco más ásperos.

Pero hay una cuestión que quería mencionar con respecto al rol del juez. Esa idea que se menciona del rol pedagógico en sí, no tiene que ver necesariamente con el tema de la imparcialidad. La idea del rol pedagógico tiene que ver que cuando un sistema comienza a

funcionar y comienza a establecerse un sistema de audiencia hay nuevas prácticas. En esas nuevas prácticas los jueces tienen dos decisiones fundamentales en un sistema de audiencias: La primera, es la conducción de una audiencia y, la segunda, la decisión. En la conducción de una audiencia el juez tiene que tener un rol proactivo y mantiene la imparcialidad. Pero tiene que tener un rol proactivo en las audiencias previas, en las preliminares para generar un contradictorio en la audiencia. En esos primeros estadios es importante que el juez no esté en un rol duro, sino que pueda generar espacios adecuados para que las partes puedan litigar. No tiene más que ver que con eso.

Y otra cuestión que quiero mencionar es que en realidad al juez -en estos sistemas- se le ve notoriamente disminuida la carga de trabajo. El juez que está acostumbrado a trabajar en un sistema en el cual tiene que leer expedientes, escritos interminables, etcétera y después tomar la decisión, revisar la decisión que sus colaboradores le van realizando en los proyectos para después firmarla, es un trabajo que requiere varias instancias: recepción, verificación, proyectos, revisión y decisión. Y tiene un riesgo adicional, que en esa lógica del sistema escrito el juez termina construyendo una decisión con conocimiento privado. Esto es: conocimiento que surge de un expediente pero que las partes no han debatido. En el sistema de audiencias, al contrario, el juez ingresa con absoluta imparcialidad porque no recibe ni expedientes, ni pruebas, ni legajos, no recibe absolutamente nada y de cara a la comunidad con los planteos resuelve. Esas tres o cuatro instancias se focalizan en una única, y es tan fuerte esta imagen que hace poco en La Pampa un juez ingresa con un expediente a una sala de audiencias –con un legajo de la Fiscalía- las partes lo recusan, se hace lugar a esta recusación dejando bien en claro: “*señor juez: usted no tiene nada que ver con la investigación del fiscal, no tiene que tener ninguno de estos elementos*”.

Entonces, en realidad, este sistema fortalece fuertemente la imagen de imparcialidad, es uno de los grandes puntos a trabajar, uno de los grandes desafíos.

Sr. Binder.- Después voy a contestar algo del tema de menores, pero sigamos con la reunión.

Sr. Presidente (Caponio).- Tiene la palabra el señor Albo.

Sr. Albo.- Igualmente, deseo reiterar el agradecimiento a los doctores Binder y Rúa y la clara exposición de los lineamientos generales del proyecto.

Solamente para hacer una aclaración, quizás la expresión que tuvo el doctor Rúa pueda ser malinterpretada cuando dijo que el 85% de las causas van a parar a la basura.

En realidad, lo que reconozco como miembro del Poder Judicial y como juez, es que, efectivamente, quizás en este momento la respuesta de la Justicia no sea la de mejor calidad para la comunidad. Pero también es cierto que si tomamos ese 85% de causas en las que no hay una respuesta punitiva, la razón por la cual no se da esto es porque en los hechos se está aplicando –de manera informal y fuera de cualquier normativa- el principio de oportunidad. Eso es lo que en realidad se está haciendo y no quiere que esto no sea malinterpretado e como que las causas van a parar a la basura.

Es decir, en primer lugar, debemos reconocer que hay una hipertrofia del sistema penal en Tucumán debido, fundamentalmente, a que se busca en la Justicia Penal la respuesta a multiplicidades de conflictos que no son de entidad penal; eso por un lado. Y estos de alguna manera van obteniendo sus respuestas informales en la actuación del fuero Penal y quedan allí las causas, lo que no quiere decir que vayan a la basura. Es decir, cuestiones relacionadas con temas patrimoniales, con usurpaciones, con conflictos de tierra. Bajo la forma de “usurpación” se trata de buscar una solución alternativa de índole civil, también cuestiones relacionadas con la violencia doméstica, que no necesariamente tienen un contenido penal, sino que muchas veces deben tener otro tipo de soluciones restaurativas, como es la que precisamente se está propugnando con esta reforma.

Simplemente quería hacer esa aclaración: lo que hay es una respuesta desviada del sistema formal del proceso penal. Reitero: que no se malinterprete esto de que el 85% de las causas van a parar a la basura. Gracias.

Sr. Binder.- Sí, usted tiene toda la razón, no pretendía hacer una fórmula despectiva. Lo que sucede es que no deja de llamar la atención que luego cuando uno lee las estadísticas, incluso esta actividad benéfica de la Justicia que hace un montón de reparaciones informales y de acuerdos, nunca aparece. Uno lee las estadísticas que es cómo se rinden cuentas y ahí aparece simplemente *archivo*, porque no se muestra, con lo cual esto también nos está llamando la atención sobre un modelo de funcionamiento muy extraño, porque en

vez de mostrarle a la sociedad todo lo que se hace se muestra lo que no se hace; entonces, esto es también un defecto del modelo de organización que no sabe hablar claramente con la sociedad, ni siquiera cuando hace cosas buenas. Ese era el sentido de esto.

Aprovecho para contestar muy brevemente el tema de jóvenes y menores, que es un tema gravísimo en el país y que hoy no se va a resolver con la discusión sobre imputabilidad, que es una discusión electoral de ahora, sino con algo que todos sabemos, el sistema administrativo, por poner un nombre, de contención para la educación de los menores hace crisis, hace agua en casi todos los lugares de este país, no sé cómo será acá en Tucumán, todos los jueces están desesperados porque no tienen adónde llevar a los chicos, dónde entregarlos, dónde reeducarlos; entonces, coincido en que es uno de los grandes desatinos que estamos haciendo en nuestra Patria. Pero si tocar los aspectos de inimputabilidad o a veces inclusive, tocar el tema penal cuando ya tenemos la Convención del Niño y la Ley de Menores en el país, nos alcanza para tomarnos en serio el régimen de soporte que necesita cualquier sistema penal juvenil y que, insisto, desconozco el de Tucumán, sí el de Buenos Aires, el nacional y deja mucho que desear sobre su capacidad de dar las mínimas respuestas, salvo que queramos mandar a los chicos a las cárceles comunes, cosa que creo que nadie está dispuesto a hacerlo.

Sr. Racodo.- Una consulta que tiene que ver con la forma porque me parece que las opiniones de ustedes pueden ser muy importantes.

Creo que hay una coincidencia generalizada en todos los que integramos esta Comisión en la necesidad de producir una reforma en el proceso penal en Tucumán. Después sí, pueden haber muchas discusiones en cuanto al contenido final y en cuanto a las formas.

Ustedes cuando trabajaron el tema de la idea de la prueba piloto, la plantearon para los tribunales del Sur, tanto de Concepción como de Monteros. En el seno de la Comisión, por lo que hemos podido charlar informalmente, hay varios integrantes que abogan este planteo de la necesidad y ustedes lo han remarcado, que el cambio vaya siendo progresivo. Otros tienen otras ideas, por eso digo que es importante la opinión de ustedes. ¿Cómo se plantean, sobre todo el problema de la doble normativa, los planteos que puedan haber en ese sentido, tomando en cuenta que dos ciudadanos de nuestra Provincia y de nuestro país,

estarían sometidos a la misma ley de fondo, pero a sistemas procesales distintos? ¿Qué opinión tienen ustedes de esto y, sobre todo, la gran cantidad de planteos que puedan haber en ese sentido, en el lugar donde se esté aplicando la reforma, un sistema, un proceso distinto al de otro lugar de nuestra provincia?

Sr. Rúa.- Sí, estamos hablando de un sistema progresivo pero para establecer este sistema progresivo uno de los primeros ejes que tenemos que trabajar es cómo va a ser la transición como dice, para eso hay que trabajar en un sistema conclusivo. Cuando uno desarrolla un sistema conclusivo lo primero que verifica es qué carga de tarea queda del sistema anterior y en base a eso uno define los ejes que va a tener ese sistema. Por ejemplo, en Entre Ríos hay varios modelos, hay modelos progresivos en la misma jurisdicción queda de la transición, Neuquén ahora está trabajando en un proyecto en el cual esto va a quedar en cabeza del Ministerio Público Fiscal porque son pocos casos, ha habido también sistemas en Entre Ríos en los cuales los jueces de Instrucción que pasan a ser jueces de Garantías, dejaron una secretaría residual, igual que Santiago del Estero y donde se fueron tramitando. Básicamente, no ha habido mayores planteos porque a pesar de que hay dos modelos distintos se pueden establecer institutos que cobran plena vigencia, por ejemplo, institutos de oportunidad en el cual la respuesta termina favoreciendo a las partes en el proceso, porque pueden optar por una salida alternativa.

En segundo lugar, en el caso de Tucumán, el cambio mayor está en la celeridad que va a tener la investigación penal preparatoria, se pasa de un sistema muy burocrático a un sistema que es mucho más efectivo en cuanto a derechos y garantías, razón por la cual no es que son dos sistemas diametralmente opuestos en sí, porque acá el fiscal ya tiene una investigación y básicamente no hay mayores cambios, sino que, en definitiva, un sistema sea un poco más lento.

Pero no hay mayores alternativas para generar, entonces la respuesta sería: pongamos todo al nuevo modelo, si nosotros inscribimos todos los casos en el nuevo modelo lo que genera es que el sistema colapse, si es que la carga de tareas es grande, por eso el primer punto es medir qué cantidad de casos tenemos y en base a eso diseñar el sistema compulsivo.

Otro punto también que tiene que ver con esta idea de sistema progresivo es que ha habido muchos países y muchas jurisdicciones en los cuales también el sistema comenzó por las jurisdicciones más chicas, como Concepción versus la Capital, lo ha hecho Chile de esta manera, lo ha hecho Panamá, lo ha hecho Perú, Entre Ríos y, en este caso, la lógica no es que se están debilitando los derechos de las partes, sino que se van fortaleciendo gradualmente los derechos de los litigantes y esto permite manejar los errores y ajustes necesarios para la segunda fase.

Sr. Binder.- No hay otro camino que la progresividad. Lo que uno tiene que diseñar, y esto es algo que la Comisión va a tener que diseñar, es cómo administro la progresividad, y aun si uno dijera que esto rige a partir de mañana en todo Tucumán, eso va a ir produciendo sus efectos progresivamente. Entonces, lo que nosotros no queremos es que haya un sistema dejado al azar, dejado a su propio ajuste, porque si lo dejamos a su propio ajuste se ajusta mal. Entonces hay que administrar la progresividad. Santiago del Estero, por ejemplo, todas estas progresividades que nombró Gonzalo, todas son distintas y aquellos que tienen las progresividades temáticas que le llamamos como Santa Fe o como Neuquén son todas distintas. En Santiago, por ejemplo, la Cámara de Apelaciones que es única para todas las provincias las hace ingresar inmediatamente con nuevas lógicas de trabajo para que empiece a administrar ciertos derechos, ciertas desprolijidades que se dan. Más que nada ese problema que usted señala se da cuando cambia la práctica de la prisión preventiva y la excarcelación. Eso, no hay problemas, se está dando prácticamente en todas las provincias. Las prácticas vinculadas a los cambios de modelos organizacionales, pasando todos al mismo tiempo, se vuelven difícil de administrar. Entonces, estos son planes a medidas que se hacen sobre la base de experiencia y el gran tema que van a tener, dado que hay progresividad, que uno dice, bueno, acotemos un período que podrán ser tres, cinco o siete años cómo administro esa progresividad que se da en todos los casos. Van a tener diez muestras distintas de progresividades, pero lo importante es saber que esto es progresivo y que yo al sistema lo estoy acompañando y que le pongo plazos y que lo voy dirigiendo. Que tiene liderazgo y conducción, lo que no hay que hacer, porque es la experiencia anterior y hay que dejarlo solo.

Sr. Hofer.- Desde el ámbito que a mí me compete que es el Ministerio de Seguridad, quería recalcar algunas cuestiones con respecto al plan integral. Creo que es positivo, porque he tenido la posibilidad de experimentarlo como actor u operador del sistema en otro país, creo que es bueno, lo que sí, desde un principio no han dejado de preocuparme algunas cuestiones y que creo que es el lugar y el momento de plantearlo. Cuando el Poder Judicial decide llevar adelante este emprendimiento, la verdad es que lo hace de forma unilateral y el Ministerio de Seguridad se entera de esta iniciativa a través de una llamada telefónica de un fiscal que manifiesta que en diez días necesitábamos una infraestructura que, en realidad, nosotros no estábamos en condiciones de ponerla en funcionamiento y que yo le manifesté que eso resultaba de imposible cumplimiento en los plazos y en los tiempos que se exigía. Por eso no dejan de preocuparme los procesos y el método de implementación de este sistema por más que estemos hablando de un sistema de políticas públicas a prueba, de un sistema progresivo, porque es importante también que deje de manifiesto que el Ministerio de Seguridad hoy ha iniciado un proceso de un plan estratégico en materia de seguridad con el aval del Banco Interamericano de Desarrollo, y que ha comenzado un proceso de trabajo con jueces, con fiscales, con la preparatoria para un abordaje situacional.

Y ¿por qué manifiesto esto?. Por ejemplo, el señor Legislador Vargas Aignasse hizo referencia al tema de los Menores y hoy cuando hablamos de seguridad el abordaje situacional que hace el Ministerio de Seguridad, lo cual nos compete, es un trabajo multidisciplinario con respecto a los menores. Y hoy la situación o las respuestas que dan los jueces de menores no es -por así decirlo- acorde a las necesidades y a las tareas preventivas que hoy necesitamos, tratando de cortar siempre la herencia delictual. O, por ejemplo, como decía el doctor Albo de forma muy acertada la admisibilidad y las denuncias sobre las causas judiciales, haciendo hincapié en las resoluciones alternativas o en los mecanismos alternativos de conflictos.

Hoy el Ministerio está trabajando en eso, está trabajando en los derechos de las víctimas, en reducir las tasas de victimización, las tasas de revictimización que hoy tenemos. ¡Ojo, no solamente por parte del Ministerio de Seguridad, por parte de la Policía, que es el ámbito donde nos compete, sino también por parte del Poder Judicial! El cambio

debe ser paradigmático, debe ser un cambio coordinado y el trabajo en conjunto entre las dos instituciones.

Por lo tanto, mi preocupación es si realmente este plan que se pretende iniciar desde el Poder Judicial va a tener la capacidad de poder enlazar con el plan que hoy tiene el Ministerio de Seguridad, porque el criterio de trabajo de ese Ministerio es de la Policía, que es la órbita que nos compete, digamos, hacer un trabajo muy fuerte en materia preventiva, un abordaje situacional serio, trabajando sobre la resolución de conflicto en el ámbito primario, en el ámbito de comisarías y, por supuesto, con la colaboración y las garantías del Ministerio Público Fiscal, porque no podríamos darle el marco de legalidad que requiere la situación sin la participación del Poder Judicial.

Entonces, me gustaría ir viendo si está contemplada en la política pública esa prueba que hoy el Poder Judicial pretende llevar adelante, trabajar de forma, por así decirlo, coordinar con la Policía y con el Ministerio de Seguridad.

Sr. Binder.- No puedo hablar en nombre del Poder Judicial. Desde el punto de vista metodológico, obviamente, siempre hemos sostenido eso. Si usted me está hablando de los enfoques que tiene el Banco Interamericano en esto, mucho más compatibles van a ser, porque ahí van a trabajar sobre mucha prevención situacional sobre jóvenes, mucha modernización de la gestión de la comisaría y normalización del sistema de información.

Estos son tres ejes normalmente estratégicos en este tipo de plan. Así que son altamente compatibles, casi le diría que la metodología que utilizamos, que también trabajamos mucho en coordinación con el Banco Interamericano, es como la versión judicial de estas mismas estrategias, lo otro ya es coordinación política diaria que nos excede. Conceptualmente responden a similares patrones de búsqueda de eficacia mediante modelos organizativos y de gestión moderna; son compatibles.

Sr. Hofer.- Iba al punto en particular y pensando en la situación que se nos puede dar aproximadamente en veinticinco días. Estamos por poner en funcionamiento, inaugurar - por así decirlo- en la Comisaría 1ra., que pretende -entre comillas- ser el puntapié inicial de una reforma policial profunda, trabajando sobre centros de atención al ciudadano en materia de seguridad. Y uno de los puntos es que ese centro de atención ciudadana en la

comisaría va a trabajar con un asistente social para abordar el tema Minoridad, un trabajador social para abordar el tema de Drogadicción; personal especializado en materia de Violencia de Género, y el personal policial tratando –como les dije- de hacer un trabajo previo, inmediato, y de no generar o no elevar la tasa de victimización. Porque hoy en donde no estamos enfocando -el personal policial y el Poder Judicial en general- es en el aspecto de la revictimización o la victimización de todas aquellas personas que son víctimas de algún tipo de delito.

Sr. Binder.- Responden al mismo patrón, coordinan porque son el mismo modelo.

Sr. Presidente (Caponio).- Tiene la palabra el señor Caramutti.

Sr. Caramutti.- Vuelvo sobre el principio de oportunidad, que me parece que es uno de los temas cruciales de esta cuestión.

Me parece que la cosa no está en ninguno de los extremos ni de que todo va a la basura ni de que el 85% de esas causas que no se resuelven son aplicaciones del criterio de oportunidad, por lo menos racional. Está claro que en ese número importante estadísticamente de causas que no llegan a una sentencia final, que creo que es más del 85%, hay alguna selectividad. El tema es que lo que busca el principio de oportunidad es que la selectividad no sea arbitraria, discrecional o azarosa, sino que responda a algún criterio o a algunas pautas subjetivas más o menos de aplicación.

De manera que la idea es que ese porcentaje importante de causas que no lleguen a juicio, y que no van a poder llegar a juicio en una resolución por una sentencia de respuesta punitiva, responda a criterios racionales Y no ocurra lo que realmente tenemos que hacernos cargo –que ocurre ahora-, que no necesariamente los casos que llegan son los más relevantes, y a que no lleguen simplemente los que son más fáciles porque son flagrancias o pseudoflagrancias y no lleguen nunca o lleguen muy pocas causas complejas que requieren de investigaciones también mucho más sofisticadas.

Entonces, el principio de oportunidad también permite liberar el sistema de investigación para que se puedan acotar esfuerzos, recursos materiales y humanos a causas de mayor envergadura que tienen que ver con criminalidad organizada y con otro tipo de

criminalidad que muchas veces quedan en un marco –a lo mejor- de lo que la sociedad dice “impunidad”. Y esto es así porque el sistema no puede dar abasto a todo, entonces, hay que ver racionalmente a qué hay que destinar los esfuerzos.

Creo que ese –me parece- es uno de los puntos centrales, y como dice el doctor Binder, si no se hace esto con algún mecanismo de oportunidad, realmente no vale la pena. Y si además no se la hace bien a la reforma, va a significar que probablemente sea más de lo mismo. Hay posibilidad de que sea más rápida en procesar algunas cosas, más rápido el juicio oral que es una cosa fundamental que cuando tiene que llegar llegue rápido, pero a lo mejor más de esas causas más sencillas, más fáciles y no de otras causas que también de algún modo tienen que llegar en algún momento a juicio. Eso como reflexión sobre la discusión y el debate sobre el principio de oportunidad.

Y en cuanto a preguntas que quiero hacerles a los doctores, tienen que ver con el tema de este cambio de paradigma que significa la audiencia para todo y la resolución en audiencia dando la cara el juez para todo y en forma inmediata, ¿cómo juega el tema de la fundamentación? He visto que el tema de la fundamentación –y está bien que sea así- tiene que ser oral, tiene que ser en la audiencia y oral. Pero no es lo mismo una audiencia inmediata y con una explicación oral en la etapa de investigación -donde son cuestiones más o menos sencillas- a la etapa propiamente de juicio, en la sentencia de fondo donde hay muchos más problemas implicados y, probablemente, en muchos casos se puede hacer en forma inmediata y con fundamentación total. Pero hay otros casos que tienen la abundancia de prueba, temas más complejos que requieren en la fundamentación algún desarrollo argumental más importante, no necesariamente técnico, críptico. Estamos todos de acuerdo en que hay que terminar con las fundamentaciones crípticas en las que uno no entiende nada, fundamentaciones entendibles, pero con un desarrollo y una fundamentación que cumplan los estándares de fundamentación de que una sentencia debe bastarse a sí misma para permitir el control de las partes y la vía recursiva, entonces, no está claro en todas estas acordadas que explican cómo funciona esto específicamente en el debate.

No está claro tampoco como es el tema de la Deliberación, si bien entiendo que sigue aplicándose, obviamente, el Código Procesal que no está derogado pero no tengo claro si en la prospectiva futura cuando el cambio sea total esto va a seguir siendo así, y después en la posibilidad de diferir la fundamentación completa.

Me parece que no es conveniente nunca que la decisión sea el veredicto crudo sin algún tipo de explicación, me parece que siempre alguna explicación aunque sea sintética y clara tiene que haber en el mismo acto, pero me parece que tiene que preverse razonablemente, por lo menos para algunos casos, un plazo de fundamentación completa con una nueva audiencia, de lectura, obviamente, como se hace en la actualidad, pero no me queda claro cómo está contemplado esto porque en la normativa de las acordadas no está, incluso hay como un silencio aparentemente deliberado porque dice algo expresamente respecto de las decisiones durante la investigación y en el debate no lo dice. Entonces, me gustaría una aclaración al respecto.

Sr. Binder.- Sí, porque fundamentalmente el plan de trabajo implica una reingeniería más que nada en la etapa preparatoria más que en el debate. Esto se ha planteado con sentencias de la Corte Suprema de Costa Rica, en la Corte de Guatemala, de Perú; se ha planteado mucho.

En general, cuando se organiza el sistema y se da un sistema de audiencias, aumenta la fundamentación; no olvidemos que hoy la tecnología permite que todo quede registrado y grabado, con muy poco costo, inclusive, esto abarata enormemente los costos de notificaciones y los jueces se esmeran por hacer fundamentaciones reales orales y no los formularios que hacemos hoy en día.

Así que en términos generales, se diría que hay un aumento de la fundamentación entendiendo que la fundamentación es irrenunciable. Lo único que estamos discutiendo aquí es si lo hago en un papel escrito o lo hago oralmente, pero la fundamentación nadie dice que tenga que existir, un poco la experiencia muestra que aumenta la fundamentación y eso queda totalmente registrado.

En el caso de las sentencias, salvo aquellos casos que son de sentencias definitivas, sentencias después del debate, la práctica de muchos países, en muchos sistemas hay veces en que las partes autorizan, los jueces les dicen, tienen problemas y entonces se hace, pero normalmente se hace en causas muy sencillas en el resto se iban a fundamentaciones escritas de la sentencia por el título de ejecución para hacer precisiones, pero en la sentencia definitiva de los juicios más complicados, en general se ha ido

resolviendo pragmáticamente porque también influye mucho lo que uno le dice a las partes, después le dice “si tiene problemas, que fundamente oralmente” y lo hace.

Sr. Rúa.- Mi experiencia de juez de la ciudad de Buenos Aires, cumple las funciones de garantía y de juicio dependiendo del caso, razón por la cual tengo experiencia en la toma de decisiones tanto en la investigación penal preparatoria como de la etapa de juicio. En cuanto a la etapa de juicio comparto la postura que mencionaba respecto de que el veredicto debiera ser claramente fundamentado y explicado, no un veredicto vacío de argumentación.

En mi experiencia he resuelto casos sencillos directamente oralmente donde preguntaba a las partes si tenían algún inconveniente en que dicte mi decisión y casos sencillos, paso a un cuarto intermedio y en media hora o una hora llego con la decisión y queda en un sistema de registro de audio y vídeo, que es un tema que había quedado presupuestariamente no necesariamente es algo caro. En los sistemas judiciales, hoy en día se puede implementar a bajo costo.

Sí creo que hay que trabajar en este tipo de fundamentaciones sobre todo porque el rol en esta idea de conducción y decisión que decíamos, los dos manejos que hay que tener, al momento de hablar de la decisión tiene que tener un lenguaje llano hacia las partes y en un lenguaje también acabado en cuanto cada uno de los fundamentos que puede haber tratado, en cuanto a los abogados en sí. Entonces, comparto plenamente esta cuestión y sí deliberadamente en un juicio oral se trabajó básicamente en lo que es la definición dentro de lo que es la función jurisdiccional de lo administrativo y se dejó que el proceso avance para que una vez que comenzara y se evaluara viéramos cuáles eran las próximas contras de todo el sistema. Y en una pequeña apreciación con respecto a esto que mencionaba del principio de oportunidad. El profesionalizar el principio de oportunidad implica, más allá de las estadísticas del 85% o no que se dan, y que se dan en todos los poderes judiciales que no van trabajando fuertemente en aras de profesionalizar el principio de oportunidad.

Establecer un sistema de última ratio, de oportunidad, tiene que ver con generar respuestas satisfactorias, como bien dijiste, por un lado, y también permitir investigaciones complejas, que esto se mide, claramente, en cuanto a los recursos humanos que destina la Fiscalía, la unidad fiscal, en cada uno de los ítems. Pero para obtener esa respuesta

satisfactoria, no es solamente un acuerdo de partes, se requiere una oficina que genere una información previa, para saber cuáles son las capacidades del imputado, cuál es el conflicto en sí y qué es lo que piensa la víctima.

En segundo lugar, conocer las necesidades de la sociedad, en donde requieren tareas comunitarias, cuáles son las características del imputado y cómo pueden satisfacer a la comunidad.

En tercer lugar, la toma de decisiones para que todo esto llegue a último momento a la audiencia y, en cuarto lugar, tiene que ver con el control y la información. Información periódica que se le da a la víctima para que sepa qué es lo que se resolvió, si es que no estuvo en la sala de audiencia; conversación constante y control para ver si el imputado va cumpliendo cada una de las pautas establecidas, que en un sistema de formalizado y un poco sui generis, porque el Código no genera mayores oportunidades para este tipo de salidas, no se puede dar el lujo de estar realizando esas tareas, no hay oficinas.

Sra. Castillo de Ayusa.- Quería referirme a la exposición del señor Secretario de Seguridad, y en ese sentido decir que no advierto que el tema que estamos tratando en este momento, reforma de nuestro Sistema Procesal Penal de la Provincia, sea incompatible con todo un plan estratégico del Ministerio. ¿Y por qué digo esto? Porque parto de la premisa y lo analizo desde la óptica, que hablar del Sistema Procesal de una Provincia es hablar de la actuación en la administración de justicia frente al hecho concreto. Y analizar toda la actividad del Ministerio, en este caso de Seguridad, es hablar de la prevención, actividad o tarea que le es propia al Estado.

Ocurre que en la Provincia no contamos con una policía, llamémosle judicial u otro título, que sea realmente un auxiliar inmediato de la Administración de Justicia. Y esto, lamentablemente, para quienes recordamos la gran Reforma, como dice el doctor Binder, nuestra primera reforma, allá lejos en el año 1991, nos ha pasado por alto; no hemos capacitado a nuestra policía como auxiliar nuestro, y creo que en este momento no debemos pasar por alto este problema, que entiendo no es menor. Y no es menor porque dentro de los tres ejes que han planteado acá los doctores, han hablado de un eje normativo y de un eje de capacitación. Y en ese sentido, como le compete al Ministerio de Seguridad todo lo que hace a la policía, también debemos ir pensando en una reforma de la currícula de la

Escuela de Policía. Y digo esto porque, si bien es cierto no estoy en la Escuela de Policía, sí soy docente de la Escuela de Penitenciaría.

Entonces, por un lado está la Escuela de Policía en cuanto a su reforma y capacitación para este nuevo Sistema Procesal de la Provincia, y también debemos pensar en el Sistema Penitenciario como contralor de las futuras resoluciones que se pudieran tomar con respecto a la ejecución de las medidas de solución alternativa de conflicto.

Entonces, desde ese punto de vista, mi aporte va en el sentido que entiendo no hay incompatibilidad.

Hablamos de un Sistema Procesal Penal de la Provincia y la Policía como auxiliar nuestra, que la misma ley lo dice.

Sr. García.- La verdad es que mi pregunta es muy concreta y me gustaría que me dé una gran tranquilidad y va relacionada al principio consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, que tiene que ver con el principio de inocencia.

Con este sistema, con este método de audiencias, ¿el imputado va a tener que concurrir a demostrar su inocencia?, ¿qué es lo que ustedes prevén?

Sr. Binder.- Si hay algo que tiene que estar claro en nuestra Constitución y lo ha repetido la Corte Interamericana hasta el cansancio y es una de las características centrales de todo el proceso penal, el imputado no tiene que demostrar nada. La carga de la acusación, la carga de la prueba la tiene siempre el acusador. Esto es irrenunciable en un modelo de Justicia constitucional. No creo que nadie ponga en cuestionamiento eso.

Ahora, volver en realidad a ese principio implica: en primer lugar, que tenga un juez que proteja ese derecho y se lo esté exigiendo al acusador. Entonces, para eso debo tener al juez en una cuestión imparcial en la práctica, en el día a día, no en los libros y eso se logra en la Sala de Audiencias. Y, en segundo lugar, tengo que lograr que las herramientas de defensa se ejerzan de un modo transparente frente a ese juez y frente a un fiscal al cual lo estoy obligando a poner las pruebas sobre la mesa.

Entonces, diría que al contrario, estamos tratando de construir de un modo concreto las herramientas que vuelven realidad cotidiana ese principio.

Sr. García.- Y la otra pregunta tiene que ver si desde la Provincia de Tucumán se puede legislar para modificar el artículo 76 del Código Penal, que regula la suspensión del juicio previo.

Sr. Binder.- Creo que sí, es la misma discusión sobre el principio de oportunidad en el sentido que son facultades provinciales históricas, porque si ustedes leen el decreto en el cual Joaquín V. González en el año 1904, época de Roca, crea la comisión que va a hacer el Código Penal de 1906, que luego es el Código Penal vigente de hoy en día. Y también le encarga hacer un Código Procesal Penal, que luego no lo hace. Joaquín V. González lo dice claramente: el invento que las provincias tienen que organizar su Justicia Penal, es de Tejedor, que no existe. Tiene un capítulo que se llama: “Sobre los Códigos de Fondo y los Códigos de Forma”, y dice: “Fue Tejedor el que inventó esto cuando no existe en nuestra Constitución -va a decir Rivarola-, y lo importante es que acabaron con eso”.

Y esto quedó luego en el Código Penal con facultades procesales que fue tomando el Código Penal y ahí quedó. Lo cambió luego -en los últimos diez o quince años- es que las provincias a la hora de comenzar un proceso de reorganización de justicia penal empezaron a darse cuenta de que esta es una herramienta ineludible para hacerlo. ¡Pero claro que se pueden hacer modificaciones!

Sr. Vargas Aignasse.- Este avance, eventualmente, en algunas facultades puede estar permitido por la jurisprudencia o por el uso de algunas provincias, pero va a generar una litigiosidad adicional, se van a generar planteos y esto también será de alguna manera preocupante. No hay duda de que un abogado defensor va a plantear la cuestión de fondo si entiende que a partir de este principio se ha conculcado algún derecho.

Sr. Binder.- Las experiencias en cada provincia no las han planteado los abogados defensores, pero en general son cláusulas que amplían las facultades del defensor. Lo han planteado algunos querellantes y en algunos lugares algún fiscal díscolo pero rápidamente lo han resuelto los tribunales superiores.

Porque además, los tribunales superiores tenían a la vieja jurisprudencia sobre la insustentabilidad de la acción, no sé si acá la tendrán o no, que la utilizaban para sobreseer

aquellos casos muy amplios e irse por afuera de los plazos y acortar los plazos de prescripción; la insubsistencia de la acción.

Y el viejo Código cordobés tenía la prórroga extraordinaria del proceso que provocaba el sobreseimiento, que es otra vez lo mismo, y fue hace sesenta años objetado sobre la inconstitucionalidad, donde salió Ricardo Núñez a sostenerla.

Este tema había quedado oculto, pero las provincias cuando lo ponen lo empiezan a defender porque es defender facultades provinciales. Así que a esto no le tendría miedo en su influencia práctica; se resuelve rápido.

Sr. Rúa.- Déjeme volver al tema del Principio de Inocencia y cómo juegan las garantías para la defensa pública y privada en el sistema de audiencias.

Vamos a un caso bien concreto: discusión de libertad en el Código hoy en Tucumán: la defensa plantea la excarcelación, el fiscal contesta por escrito y el juez resuelve. No hay una segunda vista a la defensa, por lo general en los sistemas escritos la última palabra la tiene la Fiscalía. Este es un sistema escrito. En un sistema de audiencias se evita eso porque hay un contradictorio constante, razón por la cual no solo el principio de inocencia se ve fortalecido, el principio de imparcialidad, la igualdad de armas, la posibilidad de generar pruebas en la misma audiencia. Eso es una clara muestra de cómo cambia la discusión de la libertad en el sistema actual escrito y cómo se genera un nuevo escenario en el sistema de audiencias.

Sr. Presidente (Caponio).- Tiene la palabra el señor Molina.

Sr. Molina.- Buenas tardes.

Quiero hacer referencia a lo que expresó el señor Secretario de Seguridad. Estoy realmente de acuerdo con lo que dijo que participó, de alguna manera, de este nuevo sistema adversarial, lo conoció a este sistema, que realmente funciona muy bien. En eso estoy totalmente de acuerdo, porque de todo lo que voy estudiando, leyendo, sobre todo lo que es el sistema adversarial, creo que va a ser muy bueno para nuestra Provincia.

Pero en lo que no estoy de acuerdo con el señor Secretario de Seguridad es en lo que hace referencia a que los jueces de Menores no dan respuestas a la sociedad. Creo que

esto es obvio: imagínense que el sistema acusatorio entró en vigencia hace veinte años, ¿cómo puede ser que únicamente se creó en la estructura del Poder Judicial el Centro Judicial de Monteros? O sea, los jueces de menores desde hace veinte años son dos personas que tienen que resolver todas las cuestiones. Sumado a ello, es que no debemos desconocer -y lo digo con todo respeto- que para el Poder Ejecutivo el tema de los Menores es un tema candente. Y yo, como defensor oficial público, que estoy en la investigación general preparatoria y estoy en los juicios orales, conozco y sé perfectamente que cuando estoy de turno llegan más de 50% de los chicos en estado de drogadicción, con efectos de las drogas y llegan así a prestar declaración. Y no sé si es del 50% o más.

Esta es una situación en la que creo que es fundamental crear centros de rehabilitación, y sí considero que el Poder Ejecutivo -respecto a los centros de detención- creó nuevos centros. Eso por un lado.

La segunda pregunta es una inquietud que tengo para los disertantes, y es respecto al tema de cómo en Chile, que es uno de los países que ya implementó este sistema: ¿usted tiene estadísticas de cuántas audiencias orales, por día o mensuales tienen las partes, los jueces, los fiscales o los defensores?

Sr. Binder.- Estadísticas no muchas, habría que ver los distintos pueblos y ciudades.

En el sistema de audiencias usted tiene tres tipos: las audiencias de detención y audiencias incidentales en etapa preparatoria, que son rápidas y se hacen muchas, las que sean necesarias. Las audiencias de algunas salidas alternativas o suspensión a prueba o procedimientos abreviados. Con los modelos de organización nueva, el sistema adquiere mucha más capacidad hacia la audiencia porque cambian también los modos en cómo participan los jueces, no es rígido el sistema; y a su vez también cambia el modelo de suspensión de audiencias que se hace. Pero no, estadísticas no tengo. Se hacen muchísimas porque después muchas peticiones que van por escrito son los tres minutos que llega la parte ahí y le dice al juez “*tal cosa*”.

Sr. Presidente (Caponio).- Tiene la palabra el señor Fara.

Sr. Fara.- Buenas tardes.

Una pregunta con respecto a las soluciones alternativas y al criterio de oportunidad. En el proyecto estaba contemplada la mediación penal, entonces, mi pregunta concreta es si ¿eso se haría a través de mediadores que pertenecen al Poder Judicial o particulares?, ¿en qué lugar se haría? , ¿tendrían la asistencia letrada o no, las personas que van a mediar? ¿o quiénes deciden quién va a mediación y quién no?

Sr. Binder.- Depende, en muchos sistemas posibles, en un programa piloto los mediadores estaban en una oficina del Ministerio Público.

Sr. Rúa.- Había mediadores para los casos más complejos de resolución, el resto de las partes llegaban a acuerdos.

Sr. Binder.- Acá hay que diferenciar la actividad conciliatoria que se hace en el proceso penal no depende del mediador, esa es una cosa más ágil que se hace entre las partes y los abogados que tienen práctica de eso. Cuando un caso se vuelve complicado se llama a un mediador sino pasa, como la experiencia que tuvimos en Chaco, que ellos están saliendo ahora, que mandaban todo a mediación, entonces el mediador estaba saturado y daban audiencias de mediación dentro de los cuatro meses. El mediador es un profesional que interviene cuando un caso se vuelve difícil. Entonces, allí saco un profesional y muchas veces lo pueden pedir las partes o a veces el juez, o hasta puede decir “*a este caso mándenlo a mediación*”. Pero es un modo de intervención profesional para algunos casos nada más. ¿Dónde están los mediadores? Pueden estar en distintos lugares, en la secretaría del Poder Judicial o el Ministerio Público y a veces también las partes pueden tener un mediador privado.

Sr. Presidente (Caponio).- Les quiero hacer dos preguntas concretas respecto al proyecto que nos acerca la Corte Suprema de Justicia.

En el artículo 4°, respecto de los deberes del fiscal coordinador, quien va a coordinar todo el Ministerio Público Fiscal, establece la visión político-criminal de la institución y la Ley Orgánica de Tribunales establece en su artículo 94, inciso 8°, respecto de las funciones del ministro fiscal: “*Impartir a los integrantes del Ministerio Público las*

instrucciones de carácter general convenientes al servicio y al ejercicio de sus funciones”.

Creo que hay una delegación de las facultades del ministro fiscal hacia el fiscal coordinador, o en este caso tenemos dos ministros fiscales. Esa es una pregunta concreta.

La segunda pregunta respecto del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de Defensa, ustedes tanto al fiscal coordinador como al defensor coordinador, por así llamarlo, lo designa el ministro fiscal, sino para profundizar el sistema adversarial debería haber una división entre el Ministerio Público Fiscal por un lado, independiente del Ministerio Público de la Defensa, que no se superpongan las facultades.

Y una tercera pregunta que habría que hacer porque en esta mesa se ha estado alabando todo el sistema de audiencia, quiero tomar como ejemplo la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, porque leía el proyecto respecto de las reformas que hacían y leía el Código Procesal Penal actual y nosotros tenemos en nuestro Código, en el artículo 473, que dice: *“Al comparecer el apelante deberá manifestar si informará oralmente o no”* y en el artículo 477, de las facultades del presidente, dice: *“El presidente fijará audiencias con intervalos no mayor a tres días”*, desde que llega la apelación. Si realmente tenemos los recursos de la audiencia y de la oralidad y no se está haciendo uso, ¿qué me garantiza a mí al hacerlo obligatorio que va a tener éxito el sistema?

Sr. Binder.- Con respecto a la primera, no, más bien es compatible en el sentido que el fiscal coordinador de un área territorial específica es el que canaliza a las instrucciones generales. La instrucción general puede decir que se le dé prioridad a tal delito o a tal otro, que se le dé tal tratamiento respecto de una forma de criminalidad y que luego lo canalice en su área territorial que tiene particularidades el fiscal coordinador que custodia esas instrucciones generales que expresan el plan político criminal de todo el Ministerio Público y que siempre va a estar en particular. Así que ahí no veo que haya compatibilidades porque el principio de unidad del Ministerio Público no está afectado.

En cuanto a la segunda pregunta, esa ya es una reforma institucional mucho más profunda, estoy ciento por ciento de acuerdo acerca de la división de esta autonomía, hoy es una pelea que se está dando en Buenos Aires, en La Pampa, en todo el país, en las provincias que todavía no han dado el paso hacia la autonomía de la defensa pública, separada del Ministerio Público. Porque tener al jefe de los fiscales y al jefe de los

defensores en una misma figura, para algo nos sacamos al juez de Instrucción de encima. Así que, sin ninguna duda, esa es una reforma más institucional, de fondo.

Y en cuanto al tercero, no hay garantías, pero justamente, la intervención sobre las prácticas es el punto, por eso les digo esto de bajar al terreno, porque el abogado nuestro, que todavía en la Universidad no se les enseña ni se les da la cultura de la oralidad, empuja al sistema de escriturismo. Entonces, tienen que ser modelos de organización y coordinadores muy claros que los estén empujando a la práctica; cuando empieza a funcionar, el sistema arranca. Pero aquí no hay un suero que le pongamos a los operadores y que los vuelve oralistas del día a la mañana. Es, el generar una práctica controlada que los empuje a la Sala de audiencia. En todas las oportunidades, el Código de Tucumán, actual, con otra comunidad jurídica que no tuviera la tradición ya se hubiera vuelto solo muy oralista

Sr. Caramuti.- ¿Me permite un segundo?

Me parece que también va a contribuir a una mayor garantía, si se quiere, la garantía nunca va a ser absoluta, porque todo depende, en definitiva, de los operadores, es esta división entre lo que es la gestión judicial y la función jurisdiccional propiamente dicha. No es lo mismo un tribunal que está funcionando, acumulando ambas funciones a cuando los jueces son liberados de la carga administrativa de tareas, hacia una oficina que gestiona las audiencias y toda la parte administrativa, están destinados exclusivamente a hacer audiencias. Está claro que este juez va a tener más posibilidades de atender oralmente todas las audiencias que las que tiene, cuando tiene, además, que ser gerente, gestor de oficina, gestionar las notificaciones, etcétera, etcétera.

Sr. Jogna Prats.- Las dudas que se me presentaban a mí, que eran que uno tiene la estructura mental cuando ejerce como abogado del sistema escrito. Realmente todo lo que tenemos en el ejercicio -salvo el juicio oral propiamente dicho- el sistema penal, todo lo demás funciona con un sistema escrito. Y siempre estamos acostumbrados al cotejo del expediente. Entonces había muchas cosas que en la práctica no entendía bien cómo funciona en esto de que no va a haber un expediente hoy.

Yo voy a una audiencia; y como abogado defensor, me contratan para ir a dicha audiencia en la que se está investigando un delito normal, o un delito más complejo, un homicidio simple, en donde uno estructuralmente en la cabeza sabe que cuando llega a esa audiencia, o mejor dicho cuando se lo contrata para esa defensa hoy, llega, ve un expediente, puede haber un secreto de sumario, entonces, tal vez no lo podamos ver en ese momento, pero cuando vamos a asistir a una declaración hay elementos que uno los puede cotejar en ese momento, están glosados en un expediente, hay declaraciones testimoniales, hay actas y tal vez informes.

Hoy, cuando uno va a este sistema, va a ir a una audiencia preliminar oral y yo no sé con qué nos encontramos los abogados, incluso, con qué se encuentra el fiscal. Porque usted ponía el ejemplo que cuando llega el juez con un legajo, ese legajo ha sido materia de recusación. ¿Cuáles son los elementos, en primer lugar, que vamos a cotejar los abogados y con los que va a contar el fiscal para llegar en paridad de condiciones a esta audiencia? Porque si yo, como abogado defensor llego a una audiencia y no tengo ningún elemento, no los conozco a los elementos, no sé cómo son tangiblemente. Tal vez las declaraciones testimoniales estén grabadas o no sé cómo está rediseñado este sistema. Uno sabe que la declaración testimonial con la que lo están acusando va a estar escrita; acá da la sensación que hay muchas piezas que no van a estar escritas. Puedo tomar una declaración y grabarla. ¿Cómo hago ahora para cotejarla? , ¿cómo me encuentro? , ¿con qué escenario me encuentro cuando llego a esa audiencia? Porque por ahí llego a una audiencia y no tengo los elementos ni siquiera para preparar a la defensa con anterioridad y creo que en ese sentido el defensor estaría llegando en desigualdad en condiciones frente al fiscal o a toda la organización.

Incluso, el defensor particular, si vamos a los casos más concretos, que no cuenta con una coordinación y una estructura para la investigación como puede aparecer en otros lugares, acá, en la Argentina, salvo los grandes estudios, no pueden acceder a mecanismos de investigación de delitos más complejos, no sé con qué se encuentra, porque tal vez el Ministerio de la defensa sí tenga esos elementos, pero los defensores particulares no y eso irremediablemente va a llevar a que el sistema se dirija hacia la defensa pública. Por eso, pienso que esto no es bueno, como representante del Colegio de Abogados lo veo de esa forma, y creo que no es bueno para sociedad en donde el sistema esté cimentado sobre una

defensa pública y un sistema de acusación pública sin los elementos. Eso no lo concibo, una pregunta.

Después no termino de interpretar, no pongo en mi cabeza que el juez me haga toda la resolución oral en ese momento y nosotros que la tenemos que recurrir por la vía que sea, se haya previsto un recurso de apelación, se haya previsto un recurso de casación, no me queda un soporte escrito o tal vez sí me queda cuando tengo que atacar una sentencia. Hay sentencias que pueden tener tres hojas y hay sentencias que pueden tener cien hojas.

La exposición del juez no es la misma, no puede ser la misma en una sentencia de tres hojas, que una sentencia de cien hojas. Y menos la actividad del abogado que no encuentra el soporte escrito para fundamentar sus agravios en contra de esa sentencia. No lo entiendo esto que no va a haber, salvo que digan: “a la fundamentación, hoy, la doy en esta audiencia y después la vuelco en un papel y ese papel quedará como soporte”.

Nos decía el doctor Rúa que eso quedaría grabado, pero cuando quiera recurrir a esa sentencia tengo que pedir una grabación, tengo que buscar un video, ver dónde me siento a verla a la grabación, preparar e ir frenando, anotando, por ejemplo, de esto quiero agraviar, como que no lo concibo, doctor.

Sr. Binder.- Son cuestiones prácticamente interesantes. Cuando decimos que no se trabaja sobre el expediente estamos diciendo que no se trabaja del modo cómo se trabaja hoy con el expediente, uno todo el día debe acumular y seguir el ritmo del expediente. Pero eso no quiere decir que no haya registros y documentos. En particular hay una institución que es muy importante, antes del juicio oral el fiscal está obligado al descubrimiento de todo lo que va a usar como prueba. Es decir, el defensor tiene acceso a todo lo que va a utilizar, va a utilizar documentos, si hay declaraciones de testigos va a tener que tener acceso y el fiscal en ese momento pone a disposición todo lo que tiene.

Inclusive, el defensor puede acceder a algún elemento de prueba o a algún documento que tenga el fiscal en su legajo, que por razones estratégicas no haya puesto en la acusación, pero igual puede verlo. Ahí no puedo ocultar nada y hay muchísimas constancias que se hacen. No lo que no es el carácter sacramental, rutinario, secuencial del expediente. O sea, el defensor tiene una documentación del caso, pero no tiene un

expediente en su estudio. Del mismo modo, el fiscal tiene y se organiza en eso. En síntesis, va a tener accesos a esos legajos de los fiscales.

También hay que trabajar mucho, porque siguen reproduciéndose lógicas del expediente, es fácil decirlo pero hay que hacer una intervención administrativa muy fuerte para ir cambiando esas prácticas.

En cuanto a la fundamentación, ya dijimos que cuando la sentencia o los juicios son más complejos se va a la fundamentación escrita. Pero, en general, las prácticas de los abogados y las cosas que hacen en nuestro país es muy fácil, porque se van con el *pen drive* y se llevan de la audiencia todo grabado. Después llegan y lo ponen en su computadora y están escuchando lo que ocurrió. Así trabajan los abogados y todos dicen que es mucho más fácil en general, no hay problemas con eso. Si el caso es más complejo, va a tener la sentencia por escrito, o en los casos más simples de audiencias que no son sentencias, en la misma audiencia el secretario le da el pendrive, un CD, se lo graba y se lo lleva, llega a su estudio y tiene a toda la audiencia para revisarla.

Si usted ve las sentencias, el modo en cómo se producen hoy las sentencias, en un 70 u 80% es información superflua, relato de lo que ocurre, la fundamentación es bastante menor en cuanto a eso porque tenemos un modo de hacer sentencias. En ese sentido, no he visto que nadie se queje de que no tengan material para trabajar, en términos generales. Lo que sí es cierto -lo que usted señala es muy importante porque ha sido un defecto de cualquier proceso de cambio grande, pequeño o mediano- es que se tiende a dejar al abogado privado fuera de todos los procesos de capacitación. Yo coincidí mucho con usted, lo estábamos hablando con el doctor Caramutti justo antes, pero coincidimos en que el eje de la defensa es la defensa del abogado de confianza, la defensa privada. Cuando no se puede conseguir eso, tenemos que organizar buenos sistemas de defensa pública. Así que en ningún momento creo que haya que propiciar el debilitamiento de la abogacía privada.

En nuestro Instituto somos muy promotores de lo que llama “sistemas mixtos”, pero esto es un debate que hay también en todo el país y en toda América Latina porque hay quienes propician un crecimiento ilimitado de las defensas públicas. Nosotros, en eso más bien creemos en modelos mixtos en donde el abogado privado, el abogado público, el abogado que en el Interior del país ni es penalista pero que cumple una función de dar

asesoramiento a una franja de medianos recursos a los que hay que prestarles especial atención y que a veces los mismos colegios de abogados no les prestan suficiente atención. Esto es un cambio en la práctica de la abogacía que también hay que estudiar.

Sr. Rúa.- Agregando un poco a las ideas: no solo el legajo de formalizado tiene que ser exhibido, sino que a mí como juez en la audiencia en la etapa intermedia los defensores cuando sospechan de que puede haber alguna evidencia, algún registro que no se haya exhibido, dejan constancia en la audiencia y preguntan concretamente: “¿qué registro hay?”; “tengo solo ese registro?”, “Sí”, y no puede ingresar después para refrescar la memoria del testigo cualquier otro registro que no haya sido descubierto en esa audiencia.

Y con respecto a las decisiones, hay una cuestión de las decisiones judiciales de los sistemas escritos que menciono mucho con la idea del “*sinerbarguismo judicial*”. Todas las decisiones tienen todos los tratados, todos los pactos, todas las garantías, pero se dice: “*sin embargo, el defensor perdió*”. De modo tal que los fundamentos son medios circulares, hay páginas y páginas. Si uno busca, “¿dónde está el conflicto?: *está en estos dos párrafos*”. “¿Dónde está la determinación de la pena?: *son estos dos renglones*”, y a veces abstractos. Esta lógica en un sistema de audiencias desaparece.

Cuando los jueces empiezan a entrenarse en el sistema de audiencias, la plena decisión por ahí es un poquito más larga. La sola decisión genera en el contradictorio qué piensa de tal cuestión, tal otra. Va a la discusión y resulta: “*no lo veo así por esto, esto y aquello*”. Son cosas muy puntuales, razón por la cual los abogados, cuando terminó la audiencia, tienen bien en claro cuáles son los puntos en discusión del caso e incluso sin el audio, el vídeo de la audiencia tranquilamente pueden hacer sus recursos. Y en los sistemas, por lo general, sí te entregan directamente el CD al finalizar la audiencia y se lo llevan. Es bastante sencillo.

Otro punto más que había mencionado respecto de qué pasa si un defensor no tiene un gran estudio como para solventar eventualmente investigaciones, etcétera, ahí puede pedir el auxilio de la magistratura respecto de querer realizar un punto de pericia concreto, la Fiscalía ya tiene su punto de pericia y la defensa tiene el derecho de tener un perito de igual renombre que el que está usando la acusación y puede pedir el auxilio a la magistratura, como en realidad hoy también lo pide para algún tipo de pericias.

Así que de modo tal que inclusive un estudio chico puede manejarse tranquilamente con el auxilio de la magistratura.

Sr. Jogná Prats.- Perdón, cuando habla del auxilio de la magistratura ¿es que uno proponga y se haga cargo de los costos el Poder Judicial?

Sr. Rua.- Sí.

Sr. Presidente (Caponio).- Tiene la palabra el doctor García Posse.

Sr. García Posse.- Buenas tardes.

Primero, quería hacer una aclaración en el sentido de que no me voy a referir al trabajo, a la elaboración del Inecip porque no he tenido el gusto de conocerlo a pesar de que lo he pedido. Pero en todo caso voy a hablar de la Acordada 107, que es lo que conozco. ¿Cuál es la diferencia, en qué son parecidos o qué le falta o que tiene uno de más o de menos?, la verdad es que no conozco. Personalmente me voy a centrar en la Acordada 107, que para nosotros -y esta no es una crítica-, desde el Colegio de Abogados no hemos criticado que sea buena o mala, ni siquiera asumiendo que faltaba un régimen normativo y constitucional adecuado para ponerlo en vigencia, pero sí hemos entendido que es un producto incompleto y, por lo tanto, impracticable en las condiciones en que está la Acordada 107. Y pongo dos ejemplos y quiero que se los tome nada más como ejemplos, uno, es el régimen de menores que nosotros tenemos, escuchaba la explicación que daba el doctor Rúa y es como que me daba la sensación de que eso quedaba para después, una Ley, la n° 26.061, de protección a niños, niñas y adolescentes, que debe cumplirse no después, sino ya con el sistema actual, porque los niños, niñas y adolescentes, tienen que tener un tratamiento especial en el proceso tanto si son víctimas o si son causantes de autores de delitos. Ese es un punto que me parece que está incompleto y que si se hubiera puesto en vigencia el 1 de abril, como estaba programado, hubiéramos tenido problemas bastante serios y la verdad es que no sé cómo lo hubiéramos podido solucionar.

El otro punto que también es importante es que en la Acordada 107 no está presente, no existe el abogado particular, y cuando hablo de él me refiero tanto a la defensa

privada como, por ejemplo, al querellante particular. En la Acordada 107 ya se nota un desequilibrio en las posibilidades, sobre todo, ante un contradictorio auténtico, ante un sistema adversarial absolutamente equilibrado como creo que se pretende, nosotros tenemos una acusación, una fiscalía que tiene toda una estructura administrativa y está dicho en la exposición, estaba dicho, incluso, que la idea era que tenga su propia autonomía para investigar, no así la defensa y estamos hablando de la 107, solo de la defensa pública que tiene que sujetarse a las estructuras de la Corte, no tiene estructuras propias, menos estructura tiene todavía la defensa particular, que no tiene ninguna.

Y la corrección, porque recién el doctor Rúa decía “*como ahora*”, no, ahora es peor, ahora el abogado particular le requiere al fiscal la producción de alguna prueba y el fiscal la produce si quiere y cuando quiere. Quiero decir no es lo mismo tener a disposición de la Defensa una estructura idéntica o equivalente a la que tiene la acusación que tener la posibilidad de recurrir a la policía científica que no existe, por lo menos, como policía judicial estoy hablando.

Me parece que como trabajo de la Comisión, porque el trabajo de esta Comisión es justamente completar algo que estaba empezado, bien podríamos avanzar en establecer cuerpos técnicos para investigar, que estén disponibles para las dos partes, o para las tres si hay querellantes y no solo para una con mayor propiedad, una parte se apropia de más estructuras que otras.

Me parece que estas son cuestiones que le tocan, repito, no una crítica a lo que se ha hecho, son cuestiones que no dejo marcadas, porque son cuestiones que hay que completarlas porque sin eso no se puede avanzar. Y me parece también –y con esto termino- que parte de este problema arranca desde el diagnóstico; creo que todos estamos de acuerdo en avanzar, en salirnos lo más posible del sistema inquisitivo pero también dejar en claro, por lo menos para nosotros, que hay que huir del sistema inquisitivo, porque no respeta garantías esenciales, porque tampoco atiende a la víctima, pero no porque necesariamente sea el causante de que el sistema judicial funcione mal acá en Tucumán, que lo es, sí es el causante pero no es el único causante y doy un ejemplo: como mérito, así lo he entendido, como una virtud se destaca que este sistema, estamos hablando de la Acordada 107, no implica mayor estructura o mayor cantidad de recursos humanos, personales que el sistema actual. La verdad es que no sé si es bueno o es malo, porque

estamos hablando y le echamos la culpa que el sistema penal funciona mal, al sistema inquisitivo, solamente, cuando tenemos las mismas diez fiscalías que hace veinte años, con mucho más sobrecarga de trabajo.

Entonces, no sé, hace poco la Corte, en estos últimos años ha incrementado la cantidad de personal para incrementar el horario de atención. Y, por lo menos desde el mostrador para acá donde vemos nosotros, no ha dado ningún resultado, no vemos que las cosas se hayan agilizado.

Quiero decir, si con la estructura nueva también la dotamos de recursos insuficientes, por más que sean los mismos que tenemos ahora, vamos a fracasar otra vez. Y sí me parece importante que se piense en una oficina judicial diferente y acorde al nuevo sistema, en eso estoy de acuerdo, porque la oficina judicial que tenemos ahora es de principios del siglo XX, una oficina estructurada sobre la base de un magistrado, para el diseño de la oficina me refiero, tanto da que sea Ia o Ila instancia, Defensoría, todos tienen que tener un secretario, un prosecretario, oficial mayor, una cabeza. La Corte hace poco acaba de inaugurar una oficina de informe que tiene secretario y prosecretario, porque todas las oficinas judiciales tienen que tener aparentemente las mismas estructuras. Por eso, me parece bien, que el nuevo sistema se piense con una cabeza distinta y con una estructura acorde a lo que se está haciendo. Pero para empezar debíamos hacer un diagnóstico muy ajustado de cuál es la naturaleza y cuáles son las causas de los problemas que hoy tenemos.

Sr. Binder.- Hay cosas que nunca estuvieron sobre una mesa, en el tema de Minoridad, nunca estuvo trabajar sobre eso.

Pero quisiera señalar un punto que me parece importante, porque me parece que la Comisión va a discutirlo. Una cosa es sentarse a rediseñar todo el sistema y otra cosa es diseñar el modelo para desencadenar un proceso de cambio. No es lo mismo, claro que no, nos podemos sentar acá, establecemos un código, decimos, establecemos todo esto, pero este es el camino que yo vuelvo otra vez a decirlo, por qué razón en Tucumán, que tenían un sistema moderno hace veinte años, luego el proceso de ese sistema lo lleva a estancarse al sistema escrito. No creo que ese sea solo un problema de pocos recursos, tiene que ver con cómo uno diseña la política de cambio, el proceso de implementación de los cambios.

En este país estamos llenos de leyes, usted acaba de citar la ley de Minoridad, el derecho de los menores, a veces hasta niños y adolescentes, después nos cuesta implementarlas. Entonces, a mí me parece que dado que Tucumán, ya los planos de la casa tienen defectos, básicamente al sistema acusatorio lo tienen diseñado. Ahora, creo que lo van a tener que discutir prioritariamente, lo vuelvo a decir, esto no es un problema solamente de prudencia por falta de recursos, sino que dado que en algún punto el cambio es inexorable, que el cambio esté en manos de los operadores y su forma de trabajar, si yo no lo voy conduciendo a ese proceso de cambio, lo que me voy a encontrar es dentro de cinco o diez años con una brecha muy grande entre lo diseñado y lo que ocurre; y esto nos pasa en Seguridad, en Justicia en todo, hay que diseñar una política pública que esté bien orientada. En ese sentido, hay que hacer los cambios de ajustes que se necesiten y luego ponerlos en marcha. Asumiendo que la gran herramienta de transformación son los cambios organizacionales, el modo de organización de las instituciones públicas, fundamentalmente, que son las que se están manejando. En las dos funciones que cumple el abogado privado tiene que cambiar prácticas, tiene su organización y su estudio, él lo cambiará o no lo cambiará y, en general, no necesita cambiar nada. Esa me parece que es la discusión, no podemos ser preciosistas y estar discutiendo veinte mil problemas y hacer una reforma que sea un sistema acusatorio de segunda generación completo, un modelo nuevo para Tucumán, pero que no sepa si genera un proceso de cambio, nos va a frustrar dentro de diez años. Eso piénsenlo, porque me parece que es un punto crucial.

Sr. Presidente (Caponio).- Tiene la palabra el doctor Farjat.

Sr. Farjat.- Señor Presidente: Lo que voy a decir está relacionado con la preguntaba que manifestaba el señor Legislador Ariel García, si el imputado va a tener que probar su inocencia; y lo relacionado con lo que dijo el doctor Jogna Prats, que no hemos tenido la oportunidad de arribar a un sistema como el que se quiere implementar actualmente, que es muy positivo.

Creo que nunca, hasta ahora, a pesar de tener un Código Procesal avanzado para su época, el abogado ha tenido la oportunidad de ingresar a una audiencia en este proceso escrito. O sea que ahora va a tener mucha más garantía para acceder y probar su inocencia.

Porque el abogado está esperando dos o tres años para llegar a un debate oral y tener acceso a una apertura amplia de discusión que actualmente no la tiene. El abogado defensor está esperando dos o tres años, muchas veces debe pedir un cese de prisión porque han transcurrido los dos años sin que se dicte la sentencia definitiva.

Entonces, actualmente si llegamos a armonizar y a solucionar, y poder cubrir las falencias que mencionan los doctores Jogna Prats y Posse, entonces tendríamos un Código muy beneficioso para toda la comunidad porque el abogado se va a encontrar en igualdad de condiciones para pelear con mayor garantía, que acaba de plantear el señor Legislador Ariel García, que no es que el imputado vaya a tener menor posibilidades con respecto al proceso anterior. Pero no es así, porque el abogado va a tener más posibilidades para demostrar la inocencia de su defendido. Es lo que opino en este momento y no sé si puede responderme esto el doctor Binder, relacionado con el proceso escrito.

Sr. Binder.- Estoy en un ciento por ciento de acuerdo, recalcando que ningún imputado tiene que probar su inocencia, pero es una base de nuestro sistema el hecho de generar una audiencia con un juez donde el abogado le puede hablar directamente al juez y puede confrontar con el acusador, es una herramienta esencial sin la cual hace mucho tiempo tendríamos que haber dicho *“sin eso no se puede ejercer algo así”*. Porque en Penal, en Civil, en cualquier lugar es casi la esencia del trabajo del abogado estar en una audiencia frente a mi contrincante, frente al acusador, delante del juez, *pataleando* y gritando todo lo quiera, puedo hacerlo en nombre de mi defendido, tan simple como eso. De acuerdo en un ciento por ciento con usted.

Sr. Rúa.- Un poco también relacionado con lo que acaba de mencionar el doctor Binder y lo que mencionó el anterior colega, en realidad la defensa pública en sí, en este sistema, el diseño que se ha establecido tenía que ver con duplicar la cantidad de empleados y defensores. ¿Y por qué duplicar? Porque al duplicar el personal lo que también se hacía es establecer un gabinete y un área de asistencia y ver con las asistentes sociales que también sirve mucho en las instancias preliminares para demostrar los peligros o las faltas de peligros de fuga.

Esto lo han hecho las mayorías de las defensas públicas en sistemas adversariales de empezar con su propio cuerpo de perito que analizan las situaciones de peligro de fuga o de pericias o de imputabilidades al momento del hecho y después deciden si presentan o no la prueba.

En esta lógica, los colegios de Abogados también tiene un rol importante en cuanto a poder generar sus propias infraestructuras para generar evidencias al inicio de las audiencias. Todo esto es por desarrollar y por producir información, pero sí se está pensando también en una defensa que no va a tener nunca las dimensiones del Ministerio Público Fiscal, porque no tiene la misma cantidad de casos y porque esto también está medido. Los manuales que se han hecho en su momento están medidos a qué cantidad de defensores tiene que haber cada cantidad de fiscales, qué proporción y en base a eso generar sistemas y qué cantidad de casos puede llevar cada defensor para que la defensa no sea meramente formal.

Todo esto está pensado y por eso aclaramos, la idea era fijar los primeros puntos para tener una evaluación del modelo y ver dónde hay que hacer el ajuste después. Sin duda que el cambio de paradigmas era muy fuerte, muy sólido para las defensas y también para la eficacia del sistema, porque genera un menú de oportunidades y de salidas alternativas.

Sr. Farjat.- Me surge una pequeña duda, supongamos que avanzamos con un proceso de reforma en el cual viramos al principio de oportunidad dejando de lado el principio que contempla el artículo 71 del Código Penal. ¿Qué haríamos con la previsión del artículo 274, en el capítulo que habla de retardo y denegación de justicia en el cual prevé una sanción a los funcionarios públicos que denegaren o no iniciaran la persecución del delincuente? Me surge esa duda de cómo custodiar a nuestros magistrados en el momento en que nosotros decidamos virar al principio de oportunidad y estemos en un proceso que creamos estar en la cancha, trabajando, ¿cómo también custodiamos a los magistrados con esto que está previsto en el Código Penal de la Nación?

Sr. Binder.- El artículo 274 dice que es punible cuando el Ministerio Público, por ejemplo, no participó de una acción a la cual estaba legalmente obligado. Al modificar la legislación que lo obliga, el Ministerio Público, cuando actúa ejerciendo los distintos mecanismos del

principio de oportunidad, actúa en el marco de la ley, así que nunca hubo problemas con eso. Por eso se conoce esto como “principio de oportunidad arreglada”. Es decir, un conjunto de facultades legales para hacer; no es un sistema de absoluta discrecionalidad. Así que ningún fiscal que esté cumpliendo con la ley provincial que le facilita hacer eso comete ese delito.

Sr. Caramutti.- En todo caso, si me permite, habría que preguntarse qué estamos haciendo ahora con ese artículo, donde no tenemos el principio de oportunidad y en teoría estamos obligados a perseguir absolutamente a todos.

Sr. Binder.- Así que no va a haber problemas.

Sr. Hofer.- Un minuto solamente va a ser mi intervención, señor Presidente, para contestarle a la doctora Castillo de Ayusa y al doctor Molina.

Posiblemente me habré expresado mal o no me habré dado a entender bien, porque cuando he planteado mi preocupación con respecto a la incompatibilidad o a los criterios en donde se deben armonizar las políticas públicas en materia de criminología llevada adelante por parte del Poder Judicial, con las políticas públicas del Ministerio de Seguridad, lo que pretendía dejar plasmado es que hoy el Ministerio de Seguridad tiene un esquema de trabajo y que no quisiéramos que este proyecto que pretende dar seguridad jurídica - nosotros por un lado pretendemos dar seguridad ciudadana- en algún momento se vea estancado. Y tomo el ejemplo y ¿por qué digo esto? No es cosa menor y es verdad que la policía es auxiliar de la Justicia. Pero no nos olvidemos de algo: el trabajo que hoy haga la policía, y es a lo que estamos encaminados, es piedra angular de todo el proceso porque son quienes llevan adelante las primeras actuaciones, son los primeros representantes del Estado en la vía pública, son quienes deben trabajar muy fuertemente en no victimizar, en descomprimir el trabajo de las fiscalías. Hoy, -y esto se manifestó en muchísimas oportunidades- las situaciones que tienen las fiscalías con cuello de botella con causas menores, me refiero a lesiones, a amenazas de muerte, a problemas muchas veces vecinales, impiden que la gente tenga la percepción de justicia. Hoy cuando la gente habla

de inseguridad no solamente habla de inseguridad en el accionar policial, que es cierto y que asumimos y en el cual estamos comprometidos, sino que también la gente habla de seguridad cuando el delincuente no cumple la condena, -por supuesto que existen herramientas legales- o cuando el delincuente en cinco días está libre. Por lo tanto, cuando hablaba de la compatibilidad que tiene que tener una cosa con otra hacía referencia a eso.

Y les pongo un ejemplo a lo que hacía alusión el doctor Molina con respecto a los menores de edad: muchas veces hoy cuando llegan los menores de edad en situación de droga o lo que sea a los jueces -y esto me ha pasado, doctor- de menores -sin personalizar- cuando es el primer delito se lo toman de forma muy relajada, muy laxa. Bueno, creo que ahí es donde radica muchas veces el primer error. Cuando ese menor ingresa por primera vez a un Juzgado, es ahí en donde la policía activa un protocolo de actuación, con un abordaje situacional, viendo la situación escolar, familiar, la situación misma del menor. Muchas veces ese protocolo, la activación de ese protocolo puede superponerse con la actividad del Juzgado.

Entonces, a eso iba, no voy al hecho de que pueda resultar incompatible ni mucho menos.

Sr. Presidente (Caponio).- Tiene la palabra el doctor Sánchez.

Sr. Sánchez.- Un breve comentario por algo que dijo el doctor García Posse, pero en realidad es una petición a Presidencia o a Secretaría de la Comisión. Si mal no recuerdo, hicimos un listado con los correos electrónicos de todos los integrantes para difundir alguna información...

Sr. Presidente (Caponio).- No todos los integrantes me dejaron sus correos electrónicos.

Sr. Sánchez.- Tenía información que había ofrecido acercarlos a algunos colegas por la intervención que me cupo en la primera etapa de este trabajo que se hizo en el Poder Judicial y está disponible, no se la pude hacer llegar a quien me la haya pedido porque no

tenía todos los correos electrónicos; creo habérsela enviado a los que me la pidieron y simplemente digo, que si me pasan los correos electrónicos, porque habíamos quedado en eso, puedo enviar más información. Ha sido muy rico este intercambio de preguntas y debate, pero aún quedan muchos temas más por tratar y profundizar y mucha información que se puede compartir, que puede estar a disposición de los señores legisladores o algunos colegas magistrados o colegas abogados, que es importante intercambiar para enriquecer el debate, más teniendo en cuenta la lógica de trabajo que se plasmó en el reglamento.

Era simplemente para eso, para pedir que se difunda ese listado y podamos hacer ese intercambio de información.

Sr. Presidente (Caponio).- Siendo la segunda reunión de la Comisión y que se ha trabajado de esta forma ejemplar y exitosa, quiero agradecer en el nombre de todos los miembros, a los doctores Binder y Rúa su presencia, habernos esclarecido las dudas que teníamos y continuar con este trabajo de profundización y acercar el trabajo completo que ha realizado el Inecip para ponerlo a disposición de todos los miembros y la próxima reunión nuestra sería el día 14 de octubre a las 17 horas, así que muchas gracias a todos y, en especial, a ustedes.

-Es la hora 17:40.